



Orden, de fecha de firma electrónica, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte por la que se aprueba el Plan de Medidas Antifraude para la gestión de los Fondos *Next Generation EU* del Departamento de Educación, Cultura y Deporte.

El Gobierno de España aprobó, en la sesión del Consejo de Ministros del día 27 de abril de 2021, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española (en adelante PRTR). El PRTR está enmarcado dentro de los planes nacionales que han elaborado los 27 estados miembros de la Unión Europea para acogerse al Plan de Recuperación para Europa *NextGenerationEU*.

Con el fin de facilitar la programación, gestión y ejecución de las actuaciones financiables con los fondos provenientes del instrumento europeo, se aprobó el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (BOE Nº 341, de 31 de diciembre de 2020).

El PRTR incorpora una importante agenda de inversiones y reformas estructurales, que se interrelacionan y retroalimentan para lograr 4 objetivos transversales: avanzar hacia una España más verde, más digital, más cohesionada desde el punto de vista social y territorial, y más igualitaria. A través de estos 4 ejes estructurales se distribuyen en España los fondos europeos del instrumento *NextGenerationEU*.

La distribución de los fondos se instrumenta, a su vez, a través de 10 políticas palanca que tienen como finalidad el impulso de la recuperación económica a corto plazo y apoyar un proceso de transformación que aumente la productividad y el crecimiento potencial de la economía española en el futuro. Esas 10 palancas recogen 30 componentes en los que se articulan los proyectos de inversiones y reformas.

Se han transferido a varios órganos directivos del Departamento de Educación, Cultura y Deporte fondos correspondientes a las siguientes políticas palancas y componentes:

Palanca V - Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora.

- Componente 14: Plan de Modernización y Competitividad del Sector Turístico.

Palanca VI - Pacto por la Ciencia y la Innovación. Refuerzo a las capacidades del Sistema Nacional de Salud

- Componente 16: Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial



Palanca VII - Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades:

- Componente 19: Plan Nacional de Competencias Digitales (digital skills).
- Componente 20: Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional.
- Componente 21: Modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la educación temprana de 0 a 3 años.

Palanca IX - Impulso de la industria de la cultura y del deporte:

- Componente 24: Revalorización de la industria cultural.
- Componente 25: España hub audiovisual de Europa (Spain AVS Hub).
- Componente 26: Plan de fomento del sector del deporte.

El artículo 6.1 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dispone lo siguiente: *“Con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones que el artículo 22 del Reglamento (UE) 241/2021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, impone a España en relación con la protección de los intereses financieros de la Unión como beneficiario de los fondos del MRR, toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del PRTR deberá disponer de un «Plan de medidas antifraude» que le permita garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses”*.

Con fecha 27 de diciembre de 2021 se publicó en el Boletín Oficial de Aragón, mediante la Orden HAP/1764/2021, de 22 de diciembre, el Acuerdo de 22 de diciembre de 2021, del Gobierno de Aragón, sobre medidas de prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses en la ejecución de medidas financiadas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

En dicho acuerdo, el Gobierno de Aragón aprobó la declaración institucional por la que se asume el compromiso por el Gobierno de Aragón de lucha contra el fraude y el modelo de Plan de medidas antifraude como contenido mínimo que deberá ser adaptado y formalizado por cada departamento y organismo público o ente de la Comunidad Autónoma de Aragón que gestione proyectos financiados con cargo al Mecanismo de Recuperación y



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU

Resiliencia (MRR) en ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Sobre este modelo, con las precisiones necesarias para su adecuación a la estructura y competencias del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, se aprobó el Plan de Medidas Antifraude para la gestión de los Fondos *Next Generation EU* de este departamento mediante Orden, de 8 de febrero de 2022, del Consejero de Educación, Cultura y Deporte.

Posteriormente, el Gobierno de Aragón modificó el acuerdo citado anteriormente, mediante Acuerdo de 22 de marzo de 2023, en el que acordó adaptar el modelo de Plan de Medidas Antifraude a los cambios normativos sustantivos producidos y orientaciones emitidas, en particular a la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (BOE Nº 21, de 25 de enero de 2023). Este acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial de Aragón, número 73, de 18 de abril de 2023, mediante la Orden HAP/442/2023, de 4 de abril. El Departamento de Educación, Cultura y Deporte adaptó mediante Orden de 30 de mayo de 2023 el plan de medidas antifraude del departamento al nuevo modelo.

La modificación de la organización y funciones de la mayoría de Departamentos del Gobierno de Aragón desde julio de 2024, debido a su nueva estructura, la necesidad de incorporar nuevas referencias al canal de denuncias y la actualización de alguna normativa de referencia, entre otros aspectos, han comportado una nueva adaptación del modelo de Plan de Medidas Antifraude, y con ello la necesidad de adaptar y actualizar el plan de medidas antifraude del Departamento de Educación, Cultura y Deporte. Se hace necesario, por tanto, elaborar una tercera versión que recoja las actualizaciones y que, además, refleje los resultados del test de conflicto de interés, prevención del fraude y la corrupción relativo al estándar mínimo, que se realizan de manera periódica por el Departamento.

El artículo 8 del Decreto de 12 de julio de 2024, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se modifica la organización de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y se asignan competencias a los Departamentos, dispone que corresponden al Departamento de Educación, Cultura y Deporte, la totalidad de las competencias del anterior Departamento de Educación, Ciencia y Universidades, excepto las competencias en materia de universidades e investigación, así como todas las competencias del anterior Departamento de Presidencia, Interior y Cultura en materia de cultura, patrimonio histórico y cultural, lenguas y deporte.



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU

El Decreto 105/2024, de 13 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, dispone que integran el Departamento de Educación, Cultura y Deporte los siguientes órganos directivos: la Secretaría General Técnica; la Dirección General de Política Educativa, Ordenación Académica y Educación Permanente; la Dirección General de Personal, Formación e Innovación; la Dirección General de Planificación, Centros y Formación Profesional; la Dirección General de Cultura; la Dirección General de Patrimonio Cultural; y la Dirección General de Deporte. Las funciones cuyo ejercicio corresponde a cada una de ellas se recogen en el Decreto 225/2024, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Educación, Cultura y Deporte.

Por todo lo anterior y en ejercicio de las funciones atribuidas al Departamento de Educación, Cultura y Deporte, así como a los órganos directivos y unidades administrativas en las que se estructura, según lo recogido en el Decreto 225/2024, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, acuerdo:

Primero.- Aprobar el Plan de Medidas Antifraude para la gestión de los Fondos *Next Generation EU* del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, adjunto a esta orden.

Segundo.- Dejar sin efecto el Plan de Medidas Antifraude para la gestión de los Fondos *Next Generation EU* del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, aprobado mediante Orden, de 30 de mayo de 2023, del Consejo de Educación, Cultura y Deporte.

Tercero.- Ordenar la publicación del plan que se aprueba mediante esta orden en el Portal del Gobierno de Aragón dedicado a los Fondos *Next Generation EU* y en el Portal de Transparencia de Aragón.

Zaragoza, a fecha de la firma electrónica.

Tomasa Hernández Martín

CONSEJERA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE



PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE PARA LA GESTIÓN DE LOS FONDOS NEXT GENERATION UE

Departamento de Educación, Cultura y Deporte

Cláusula de exención de responsabilidad (artículo 9.6 Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre): *“Financiado por la Unión Europea – NextGenerationUE. Sin embargo, los puntos de vista y las opiniones expresadas son únicamente los del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o la Comisión Europea. Ni la Unión Europea ni la Comisión Europea pueden ser consideradas responsables de las mismas”.*



Título: Plan de Medidas Antifraude para la gestión de los fondos NEXT GENERATION UE del *Departamento de Educación, Cultura y Deporte*

Versión 3.0

CONTROL DE ACTUALIZACIONES

Versión	Fecha	Modificado por	Breve descripción de la actualización
V1.0	Febrero 2022		Versión inicial
V2.0	Mayo 2023	SGT	- Adopción de cambios normativos, en particular por la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el PRTR
V3.0	Febrero 2025	SGT	- Adopción matriz de riesgos del SNCA - Inclusión lista comprobación banderas rojas conforme matriz de riesgos del SNCA - Actualización mecanismo para informar de posibles sospechas de fraude, conforme a la Orden HAP/386/2024, de 17 de abril - Actualización del mecanismo para informar de posibles sospechas de fraude y del procedimiento a seguir al detectarse un posible fraude - Actualización de referencias normativas y enlaces a algunas páginas web



INDICE

1	OBJETO Y ALCANCE DEL PLAN.....	4
2	ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EN MATERIA ANTIFRAUDE.....	8
3	DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE.....	15
4	CONCEPTOS BÁSICOS.....	16
4.1	FRAUDE.....	
4.1.1	En materia de gastos cualquier acción u omisión intencionada relativa a.....	16
4.1.2	En materia de gastos relacionados con los contratos públicos.....	16
4.1.3	En materia de ingresos.....	17
4.1.4	En materia de ingresos procedentes de los recursos propios del IVA.....	17
4.2	CORRUPCIÓN.....	17
4.2.1	Corrupción activa.....	17
4.2.2	Corrupción pasiva.....	17
4.3	CONFLICTO DE INTERESES.....	18
4.3.1	Conflicto de intereses aparente.....	18
4.3.2	Conflicto de intereses potencial.....	18
4.3.3	Conflicto de intereses real.....	18
4.4	IRREGULARIDAD.....	19
5	EVALUACIÓN DE RIESGO DE FRAUDE.....	20
6	ESTRUCTURACIÓN Y DEFINICIÓN DE LAS MEDIDAS ANTIFRAUDE.....	23
6.1	MEDIDAS DE PREVENCIÓN.....	23
6.1.1	Desarrollo de una cultura ética.....	23
6.1.2	Formación y concienciación para toda la organización.....	27
6.1.3	División de funciones en los procesos de gestión, control y pago.....	28
6.1.4	Sistema de control interno.....	29
6.2	MEDIDAS DE DETECCIÓN.....	30
6.2.1	Uso de herramientas informáticas o de bases de datos.....	30
6.2.2	Definición de indicadores de fraude o señales de alerta.....	32
6.2.3	Mecanismo para informar de las posibles sospechas de fraude.....	34
6.3	MEDIDAS DE CORRECCIÓN.....	37
6.3.1	Procedimiento a seguir al detectarse un posible fraude.....	37
6.4	MEDIDAS DE PERSECUCIÓN.....	40
6.4.1	Procedimiento para el seguimiento de los potenciales supuestos de fraude.....	40
6.4.2	Información reservada y expediente disciplinario.....	41
6.4.3	Seguimiento del caso y recuperación de fondos.....	41
7	PROCEDIMIENTO PARA ABORDAR EL CONFLICTO DE INTERESES.....	43
7.1	Medidas de prevención del conflicto de intereses.....	43
7.1.1	Comunicación e información.....	43
7.1.2	Cumplimentación de una Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés.....	44
7.1.3	Comprobación de la información a través del Análisis sistemático y automatizado del riesgo.....	45
7.1.4	Cumplimentación de la confirmación de ausencia de conflicto de intereses.....	46
7.1.5	Otras formas de comprobación de información a través de bases de datos.....	46
7.2	Medidas para abordar el conflicto de intereses.....	46
7.3	El Conflicto de intereses y las autoridades y cargos del Sector Público Autonómico.....	50
8	PUBLICIDAD, EFECTOS Y SEGUIMIENTO.....	51
8.1	Publicidad.....	51
8.2	Efectos.....	51
8.3	Seguimiento.....	51
	ANEXO I: RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE RIESGO.....	53



Anexo I.1. Resultado del test de conflicto de interés, prevención del fraude y la corrupción relativo al estándar mínimo (Anexo II.B.5. de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre).....	53
Anexo I.2. Listado de comprobación de los indicadores de riesgo (banderas rojas).....	56
ANEXO II: DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERÉS (DACI)	70
ANEXO III: CONFIRMACIÓN DE DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERÉS	78
ANEXO IV: COMUNICACIÓN DE ABSTENCIÓN.....	79
ANEXO V: DECLARACIÓN COMPROMISO EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DEL PRTR.....	80
ANEXO VI: CÓDIGO DE CONDUCTA DE LAS EMPLEADAS Y EMPLEADOS PÚBLICOS	81
ANEXO VII: CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO DE LAS AUTORIDADES Y CARGOS	87
ANEXO VIII: SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DEL PLAN	91
ANEXO IX: MARCO NORMATIVO.....	92
ANEXO X: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	96



1. OBJETO Y ALCANCE DEL PLAN

El Consejo Europeo aprobó el 21 de junio de 2020 la creación del programa *NextGenerationEU* (NGEU), un instrumento de estímulo económico en respuesta a la crisis causada por el coronavirus. El Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR), establecido a través del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, es el núcleo de este Fondo de Recuperación.

El MRR tiene cuatro objetivos: promover la cohesión económica, social y territorial de la UE; fortalecer la resiliencia y la capacidad de ajuste de los Estados Miembros; mitigar las repercusiones sociales y económicas de la crisis de la COVID-19; y apoyar las transiciones ecológica y digital.

Para alcanzar esos objetivos, cada Estado Miembro ha diseñado un Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia que incluye las reformas y los proyectos de inversión necesarios para alcanzar esos objetivos. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español (en adelante PRTR) tiene cuatro ejes transversales que se vertebran en diez políticas palanca, dentro de las cuales se recogen treinta componentes, que permiten articular los programas coherentes de inversiones y reformas del Plan. Estos cuatro ejes son: la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género.

Para hacer efectivas las iniciativas planteadas en el PRTR, las Administraciones Públicas deben adaptar los procedimientos de gestión y el modelo de control. Algunas medidas de agilización se establecieron mediante el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del PRTR. Además, es necesaria la configuración y desarrollo de un sistema de gestión que facilite la tramitación eficaz de las solicitudes de desembolso a los servicios de la Comisión Europea. Para ello se ha aprobado la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del PRTR.

En el ámbito propio de Aragón se ha aprobado la Ley 1/2021, de 11 de febrero, de simplificación administrativa con el objetivo de establecer medidas de simplificación administrativa para promover la mejora de los procesos regulatorios, de gestión y la organización de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y su sector público. También se ha aprobado la Ley 5/2021, de 29 de junio, de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón que introduce medidas para



simplificación tanto de estructuras organizativas como de relaciones interadministrativas, dotando de un nuevo marco normativo para la organización y funcionamiento de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y su sector público institucional.

Asimismo, se ha previsto específicamente para estos fondos europeos, el Decreto-ley 2/2022, de 6 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para agilizar la gestión de los fondos procedentes del instrumento europeo de recuperación (*NextGenerationEU*-MRR) para la reactivación económica y social de la Comunidad Autónoma de Aragón.

En aplicación de lo dispuesto en la Ley 1/2021, de 11 de febrero, mediante Decreto 5/2022, de 26 de enero, del Gobierno de Aragón, de medidas para impulsar la gestión urgente y coordinada de los procedimientos financiados con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), en ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), se ha creado una Unidad transitoria para el impulso y apoyo a la gestión coordinada de los subproyectos financiados con cargo al MRR. Este Decreto ha sido modificado, con posterioridad, por el Decreto 299/2023, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón.

Entre las previsiones de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, destaca la obligación que impone y desarrolla el artículo 6 de que, con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones que el artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Reglamento del MRR), impone a España en relación con la protección de los intereses financieros de la Unión como beneficiario de los fondos del MRR, **toda entidad, decisora o ejecutora**¹, que participe en la ejecución de las medidas del PRTR deberá disponer de un «**Plan de medidas antifraude**» que le permita garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.

En cumplimiento de dicho mandato se aprueba este Plan, que tiene por **objeto** definir las principales acciones que deben adoptarse para evitar el mal uso o el fraude

¹ Resolución 1/2022, de 12 de abril, de la Secretaría General de Fondos Europeos, por la que se establecen instrucciones a fin de clarificar la condición de entidad ejecutora, la designación de órganos responsables de medidas y órganos gestores de proyectos y subproyectos, en el marco del sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.



en los recursos financieros del PRTR, con la finalidad de prevenir, detectar y establecer medidas correctoras para que los recursos financieros procedentes de la Unión Europea no se malgasten y cumplan los importantes fines para los que están asignados.

Este Plan se configura como un **instrumento de planificación vivo y flexible**. Podrá irse modificando conforme se dicten instrucciones, normativa o guías para la elaboración de los planes de medidas antifraude. Así mismo podrá estar en continua revisión en relación a cada una de las actuaciones planteadas en la lucha contra el fraude para perfeccionarlas.

El Plan posee la estructura de medidas que el artículo 6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre determina, en torno a las **cuatro áreas clave** del denominado ciclo antifraude: **prevención, detección, corrección y persecución** y será de aplicación, exclusivamente, a las actuaciones que lleve a cabo el Departamento de Educación, Cultura y Deporte para la ejecución de los fondos del MRR, dentro de sus obligaciones establecidas en el PRTR.

Asimismo, recoge, en relación con el riesgo de conflicto de interés, las previsiones de la disposición adicional centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 que se concretan en la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.



2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EN MATERIA ANTIFRAUDE

El **Departamento de Educación, Cultura y Deporte**, conforme al Decreto 225/2024, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón (BOA núm. 5, de 9 de enero de 2025), por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, se organiza en una Secretaría General Técnica (SGT) y seis Direcciones Generales (DG). Su organización periférica se estructura además en tres Servicios Provinciales en Huesca, Teruel y Zaragoza.

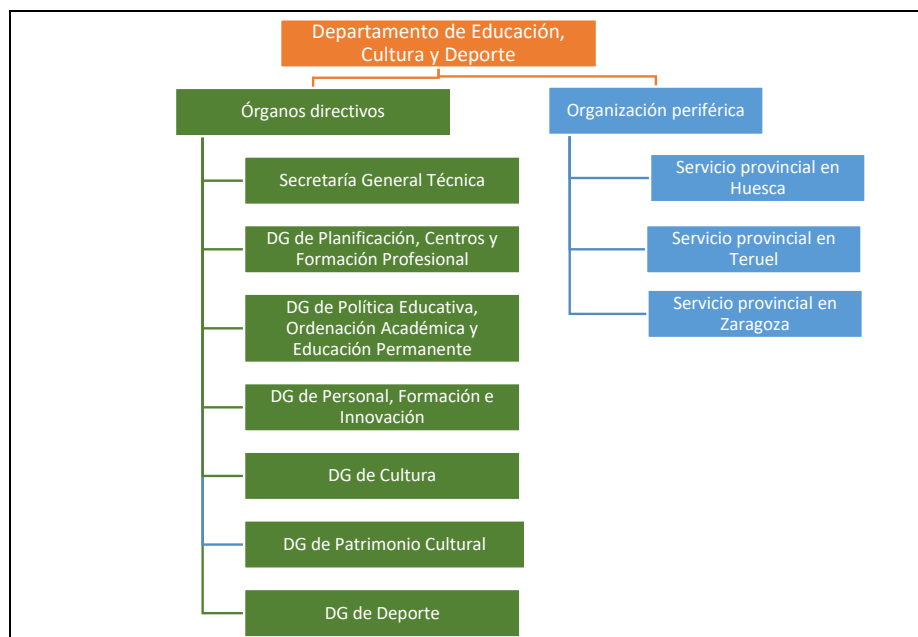


Figura 1. Estructura orgánica del Departamento de Educación, Cultura y Deporte

La Secretaría General Técnica actúa como órgano gestor de las inversiones y componentes del Departamento de Educación, Cultura y Deporte. Los subproyectos financiados en el marco del PRTR son ejecutados tanto por la Secretaría General Técnica como por las Direcciones Generales del Departamento, siendo la distribución de éstos, en la actualidad, la siguiente:



Figura 2. Distribución de los Componentes, Reformas e Inversiones que se gestionan en el Departamento de Educación, Cultura y Deporte

La Secretaría General Técnica del Departamento será quien realice la comprobación y análisis de los expedientes que identifiquen riesgos de fraude, de acuerdo con el procedimiento previsto en el apartado 6.3.1 de este Plan.



A dicha SGT, se encuentra adscrito el puesto de Coordinador/a de Fondos Europeos del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, y en ella están integrados los Servicios de Gestión Económica, Contratación y Asuntos Generales y de Régimen Jurídico y Coordinación Administrativa, que cuentan con funciones concretas en este Plan, conforme a la siguiente estructura organizativa:

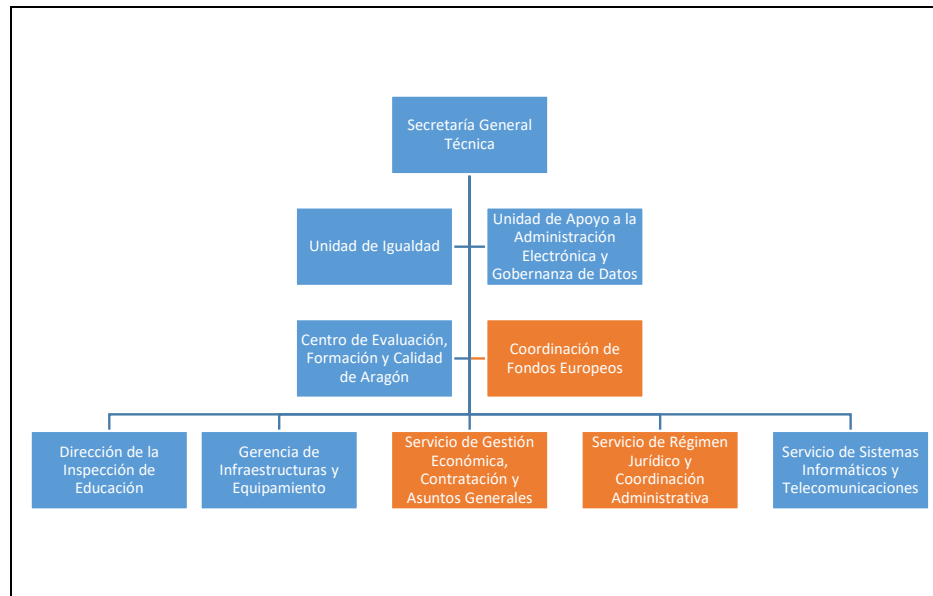


Figura 3. Estructura organizativa de la SGT del Departamento de Educación, Cultura y Deporte

Dentro de la organización de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, deben mencionarse **otros órganos y unidades con competencias en materia antifraude**, de carácter transversal.

Por un lado, conforme a la normativa referida y, en particular, al Decreto 202/2024, de 29 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública, se encuentra la **Dirección General de Financiación y Fondos Europeos**, a la que, específicamente, se le asignan las competencias en materia de fondos europeos procedentes del MRR tales como la coordinación, asesoramiento, seguimiento e interlocución con autoridades nacionales, así como con las entidades ejecutoras del Gobierno de Aragón, en el marco del PRTR.

Bajo la superior dirección del centro directivo referido, es, en particular, al **Servicio de Coordinación de los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)**, al que le corresponden las siguientes funciones:



- a) La coordinación, asesoramiento y asistencia a los Departamentos del Gobierno de Aragón, que sean Entidades Ejecutoras de subproyectos financiados con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
- b) La supervisión, y en su caso, asistencia para la aprobación y revisión de planes antifraude, por parte de los Departamentos, así como el seguimiento de la ejecución y del cumplimiento de dichos planes.
- c) El seguimiento del cumplimiento de los hitos y objetivos previstos para los subproyectos asignados a los Departamentos del Gobierno de Aragón, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
- d) El seguimiento de las asignaciones recibidas y de la ejecución de los subproyectos asignados a los Departamentos del Gobierno de Aragón en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
- e) Informar y prestar asistencia técnica a los órganos gestores encargados de la ejecución de los subproyectos vinculados al MRR, colaborando en la unificación de criterios, a través de modelos, manuales de procedimiento, recomendaciones o instrumentos de naturaleza similar.
- f) Recibir y sistematizar, cuando proceda, la información disponible para el seguimiento y el conocimiento preciso de la ejecución de los subproyectos y, proceder, en su caso, a su evaluación para la elevación de la misma al Gobierno de Aragón.
- g) La asistencia en la interlocución y, en su caso, la centralización de la información que las Entidades Ejecutoras de subproyectos financiados con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia deban facilitar a los distintos organismos de control.
- h) La interlocución técnica con la Administración General del Estado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Por otro lado, la **Unidad transitoria para el impulso y apoyo de la gestión coordinada de los subproyectos** financiados con cargo al MRR en ejecución del PRTR constituida por el Decreto 5/2022, de 26 de enero, del Gobierno de Aragón, modificado por el Decreto 299/2023, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, tiene atribuidas las siguientes funciones, previstas en su artículo 4.3:

- a) Establecer criterios generales para la gobernanza de los referidos subproyectos, según las directrices políticas que establezca el Gobierno de Aragón, asegurando la coordinación de los Departamentos.



- b) Proporcionar asistencia y apoyo técnico al Gobierno de Aragón, a través de la Comisión de Secretarías y Secretarios Generales Técnicos.
- c) Comunicar a la Dirección General de Financiación y Fondos Europeos todas las actas y decisiones de las Conferencias Sectoriales en las que se aprueben acuerdos para la asignación y gestión de proyectos financiados con cargo al MRR, en el plazo de tres días naturales desde su adopción.
- d) Compartir cualquier información relevante de la que se tenga conocimiento y que pueda redundar en beneficio de los distintos subproyectos asignados al Gobierno de Aragón como consecuencia de las comunicaciones y la interlocución sectorial que se establezca por los Departamentos con los distintos Ministerios.
- e) Realizar las funciones de coordinación, dentro del Departamento que le ha designado, en relación con los subproyectos que dicho Departamento tenga asignados, para garantizar que todos los gestores acceden a la información y a la documentación que se intercambia en el seno de la Unidad Transitoria.
- f) Tomar conocimiento de la actividad de los grupos de trabajo o comités que puedan constituirse, en el marco de la Unidad Transitoria, para ejercer determinadas funciones que requieran de mayor grado de especialización o dedicación, como es el caso del comité constituido por Acuerdo del Gobierno de Aragón de 22 de marzo de 2023, para la emisión del informe al que se hace referencia en el artículo 6.3 de la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
- g) Cualesquiera otras actividades y funciones que le encomiende el Gobierno de Aragón.

Esta Unidad está presidida por la Directora General de Financiación y Fondos Europeos o persona en quien delegue, y cuenta con la siguiente composición:

- Una persona designada por la Secretaría General de la Presidencia.
- Una persona designada por la Secretaría General Técnica de Hacienda y Administración Pública.
- Una persona designada por la Dirección General de Financiación y Fondos Europeos.
- Una persona designada por la Dirección General de Administración Electrónica y Aplicativas Corporativas.



- Una persona designada por la Dirección General de Presupuestos.
- Un/a Interventor/a designado/a por la Intervención General.
- Un/a Letrado/a designado/a por la Dirección General de Servicios Jurídicos.
- Todos los Jefes o Jefas de Servicio con competencias en materia de gestión económica, subvenciones o contratación designados por las Secretarías Generales Técnicas de los Departamentos que tengan que gestionar fondos del MRR.
- La persona titular del Servicio de Coordinación de los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) que desempeñará las funciones de secretaria de la Unidad Transitoria.

La Directora General de Financiación y Fondos Europeos, además, podrá requerir el asesoramiento y asistencia de otras personas, pudiendo participar en las reuniones y en los trabajos correspondientes el personal del sector público autonómico que se considere necesario por razón de la materia, atendiendo a criterios de conocimiento técnico especializado y competencia funcional en el ámbito de que se trate.

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de Aragón de 22 de marzo de 2023, se encomienda a esta Unidad, además, la función de emisión del **Informe al que se refiere el artículo 6.3 de la Orden HFP/55/2023 de 24 de enero**, a través de un comité que se crea en su seno, que estará formado por las siguientes personas con competencia funcional y criterio técnico especializado:

- El Secretario General Técnico de Hacienda y Administración Pública o persona en quien delegue.
- El/la Letrado/a designado/a por la Dirección General de Servicios Jurídicos.
- El/la Interventor/a designado/a por la Intervención General.
- El Inspector General de Servicios o persona inspectora en la que delegue.
- La persona de la Secretaría General de la Presidencia responsable del Servicio de Integridad, Planificación y Calidad normativa.

De otro lado, se deben mencionar **otros órganos** que actúan en esta materia:

- La Dirección General de Servicios Jurídicos, cuyas funciones se regulan por Decreto 169/2018, de 9 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se organiza la asistencia, defensa y representación jurídica a la Comunidad Autónoma de Aragón.
- La Intervención General e intervenciones delegadas, cuyas funciones están establecidas en el Decreto 202/2024, de 29 de noviembre, del Gobierno de



Aragón, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública.

- La Dirección General de Presupuestos, cuyas funciones están establecidas en el Decreto 202/2024, de 29 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública.
- La Inspección General de Servicios, cuyas funciones están establecidas en el Decreto 202/2024, de 29 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública y en el Decreto 349/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan las competencias, organización y funcionamiento de la Inspección General de Servicios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- La Junta consultiva de Contratación administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, que se regula por Decreto 81/2006, de 4 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se crea la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón y se aprueba el Reglamento que regula su organización y funcionamiento.



3. DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE.

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte declara en este punto que se compromete al cumplimiento de las normas jurídicas y éticas, adhiriéndose a los principios de integridad, objetividad, rendición de cuentas y honradez en el ejercicio de sus funciones, así como a la Declaración institucional acordada, con la misma finalidad por el Gobierno de Aragón, en sesión de 22 de diciembre de 2021.

En tal sentido, el personal al servicio del Departamento de Educación, Cultura y Deporte deberá *“velar por los intereses generales- con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico- y actuar con arreglo a los principios de objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres”* de conformidad con el artículo 52 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y artículo 42 de la Ley 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y Ética Públicas.

Este Departamento de Educación, Cultura y Deporte pondrá en marcha medidas eficaces y proporcionadas de lucha contra los cuatro riesgos más importantes previstos por el Reglamento (UE) 2021/241: fraude, corrupción, doble financiación y conflicto de intereses, basadas en su experiencia anterior y en la evaluación del riesgo de fraude, y denunciará aquellas irregularidades o sospechas de fraude que pudieran detectarse, a través de los canales de notificación establecidos, en colaboración con el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA), y con respeto al principio de confidencialidad.

En definitiva, se adopta una política de tolerancia cero con el fraude, estableciendo un sistema diseñado para prevenir y detectar, dentro de lo posible, cualquier actuación fraudulenta y, en su caso, subsanar sus consecuencias, asumiendo para ello los principios de integridad, imparcialidad y honestidad en el ejercicio de sus funciones.

En garantía del conocimiento de esta Declaración Institucional se le dará la correspondiente publicidad a través de la publicación de este Plan y su difusión al personal de este Departamento.



4. CONCEPTOS BÁSICOS

De conformidad con la Directiva (UE) 2017/1371, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del derecho penal (Directiva PIF), y en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (Reglamento Financiero de la UE) se establecen las siguientes definiciones:

4.1. FRAUDE

4.1.1. En materia de gastos, cualquier acción u omisión intencionada relativa a:

- La utilización o a la presentación de declaraciones o documentos falsos, inexactos o incompletos, que tenga por efecto la percepción o retención indebida de fondos o activos procedentes del presupuesto general de la Unión o de presupuestos administrados por la Unión o en su nombre.
- El incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información, que tenga el mismo efecto.
- El uso indebido de esos fondos o activos para fines distintos de los que motivaron su concesión inicial.

4.1.2. En materia de gastos relacionados con los contratos públicos, al menos cuando se cometan con ánimo de lucro ilegítimo para el autor u otra persona, cualquier acción u omisión relativa a:

- El uso o la presentación de declaraciones o documentos falsos, inexactos o incompletos, que tenga por efecto la malversación o la retención infundada de fondos o activos del presupuesto de la Unión o de presupuestos administrados por la Unión o en su nombre.
- El incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información, que tenga el mismo efecto.
- El uso indebido de esos fondos o activos para fines distintos de los que motivaron su concesión inicial y que perjudique los intereses financieros de la Unión.



4.1.3. En materia de ingresos distintos de los procedentes de los recursos propios del IVA, cualquier acción u omisión relativa a:

- El uso o la presentación de declaraciones o documentos falsos, inexactos o incompletos, que tenga por efecto la disminución ilegal de los recursos del presupuesto de la Unión o de los presupuestos administrados por la Unión, o en su nombre.
- El incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información, que tenga el mismo efecto.
- El uso indebido de un beneficio obtenido legalmente, con el mismo efecto.

4.1.4. En materia de ingresos procedentes de los recursos propios del IVA, cualquier acción u omisión cometida en una trama fraudulenta transfronteriza en relación con:

- El uso o la presentación de declaraciones o documentos relativos al IVA falsos, inexactos o incompletos, que tenga por efecto la disminución de los recursos del presupuesto de la Unión.
- El incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información relativa al IVA, que tenga el mismo efecto.
- La presentación de declaraciones del IVA correctas con el fin de disimular de forma fraudulenta el incumplimiento de pago o la creación ilícita de un derecho a la devolución del IVA.

4.2. CORRUPCIÓN

4.2.1. Corrupción activa

La acción de toda persona que prometa, ofrezca o conceda, directamente o a través de un intermediario, una ventaja de cualquier tipo a un funcionario, para él o para un tercero, a fin de que actúe, o se abstenga de actuar, de acuerdo con su deber o en el ejercicio de sus funciones, de modo que perjudique o pueda perjudicar los intereses financieros de la Unión.

4.2.2. Corrupción pasiva

La acción de una persona empleada que, directamente o a través de un intermediario, pida o reciba ventajas de cualquier tipo, para él o para terceros, o acepte la promesa de una ventaja, a fin de que actúe, o se abstenga de actuar, de acuerdo con



su deber o en el ejercicio de sus funciones, de modo que perjudique o pueda perjudicar los intereses financieros de la Unión.

4.3. CONFLICTO DE INTERESES

Existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier otro motivo directo o indirecto de interés personal afectando, como posibles actores en el mismo, a las empleadas y empleados que realizan tareas de gestión, control y pago y otros agentes en los que se han delegado alguna de estas funciones así como a aquellos beneficiarios privados, socios, contratistas y subcontratistas, cuyas actuaciones sean financiadas con fondos, que puedan actuar en favor de sus propios intereses, pero en contra de los intereses financieros de la UE, en el marco de un conflicto de intereses.

4.3.1. Conflicto de intereses aparente

Se produce cuando los intereses privados de una persona empleada o beneficiaria son susceptibles de comprometer el ejercicio objetivo de sus funciones u obligaciones, pero finalmente no se encuentra un vínculo identificable e individual con aspectos concretos de la conducta, el comportamiento o las relaciones de la persona (o una repercusión en dichos aspectos).

4.3.2. Conflicto de intereses potencial

Surge cuando una persona empleada o beneficiaria tiene intereses privados de tal naturaleza, que podrían ser susceptibles de ocasionar un conflicto de intereses en el caso de que tuvieran que asumir en un futuro determinadas responsabilidades oficiales.

4.3.3. Conflicto de intereses real

Implica un conflicto entre el deber público y los intereses privados de una persona empleada o en el que éste tiene intereses personales que pueden influir de manera indebida en el desempeño de sus deberes y responsabilidades oficiales. En el caso de una persona beneficiaria implicaría un conflicto entre las obligaciones contraídas al solicitar la ayuda de los fondos y sus intereses privados que pueden influir de manera indebida en el desempeño de las citadas obligaciones.



4.4. IRREGULARIDAD

Toda infracción de una disposición del Derecho de la Unión Europea correspondiente a una acción u omisión de un agente económico que tenga por efecto perjudicar el presupuesto general bien sea mediante la disminución o la supresión de ingresos, bien mediante un gasto indebido.



5. EVALUACIÓN DE RIESGO DE FRAUDE

Para poder diseñar medidas antifraude proporcionadas y eficaces, se lleva a cabo una **evaluación del riesgo de fraude** en los procesos clave de la ejecución del PRTR, que será objeto de revisión periódica conforme a lo establecido en el apartado ocho de este Plan.

Esta actuación que está orientada a la detección de condiciones que pueden indicar la existencia de incentivos, presiones o posibilidades de que las personas se vean implicadas en fraude u otras irregularidades, se configura como una **actuación obligatoria** para este órgano, conforme al artículo 6.5.c) de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.

Para la realización de la misma se han utilizado los instrumentos y herramientas puestas a disposición por la Unión Europea y por el Estado.

En primer lugar, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 6.2 segundo párrafo de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, este Departamento ha implementado los siguientes instrumentos de control y evaluación:

- El “**Test de Conflicto de interés, prevención del fraude y la corrupción**” **relativo al estándar mínimo** (Anexo II.B.5 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre) que ha servido como **referencia para la incorporación de los diferentes aspectos esenciales** de las cuatro áreas del ciclo antifraude que se contemplan en este Plan.

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.4 de la referida Orden, esta autoevaluación deberá realizarse en el marco del desempeño de la función de control al menos una vez al año de vigencia de este Plan.

En el **Anexo I.1** de este Plan se recogen los resultados del último “Test de Conflicto de interés, prevención del fraude y la corrupción” relativo al estándar mínimo, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte (Anexo II.B.5 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre).

- La “**Referencia medidas de prevención, detección y corrección del fraude, corrupción y conflicto de intereses**” (Anexo III.C de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre) como **guía para revisar las actuaciones previstas** en este Plan para tratar tanto las situaciones de



conflictos de interés (apartado 1d) como otros riesgos de corrupción y fraude (apartado 2b).

En segundo lugar, es necesario utilizar una **matriz de riesgos** que sirve como herramienta de prevención del fraude y como medio para detectar posibles debilidades y amenazas. En ella se contienen los posibles riesgos como escenarios potenciales de fraude, siendo valorados en función de su impacto y probabilidad y categorizándolos en función de su nivel (bajo, moderado o elevado) además, de definir las acciones a implementar, respecto a cada uno de los riesgos de fraude identificados.

Si bien este Departamento de Educación, Cultura y Deporte ha utilizado hasta la fecha la matriz de riesgos *ex ante* de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE), a partir de la aprobación de este Plan de medidas antifraude, pasa a utilizar la matriz de riesgos² reflejada en el **Anexo I de la Guía para la aplicación de medidas antifraude en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del SNCA**, dado que está más adaptada a la ejecución del PRTR.

En ella se contienen los posibles riesgos como escenarios potenciales de fraude, siendo valorados en función de su impacto y probabilidad y categorizándolos en función de su nivel (impacto: limitado, medio, significativo y grave; probabilidad: va a ocurrir poco, alguna vez, es probable o con mucha frecuencia) además, de definir las acciones y controles a implementar, respecto a cada uno de los riesgos de fraude identificados. En este sentido, permite determinar la probabilidad de suceso de los riesgos de una Entidad Ejecutora y señalar los controles puestos en marcha para mitigar dichos riesgos. En ella se contemplan los riesgos más frecuentes en materia de subvenciones, contratación pública y de gestión a través de medios propios, incorporando cada uno de ellos una enumeración de banderas rojas relacionadas.

El fin de la autoevaluación es obtener una predicción de riesgo objetivo bajo o aceptable, de manera que si el resultado detecta un riesgo significativo o grave se deberán aplicar nuevos controles o medidas de corrección a corto plazo o de forma inmediata, respectivamente.

Conforme a lo recogido en el artículo 6.5.c) de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, la revisión de la evaluación del riesgo de fraude se realiza cada dos años,

² Los anteriores planes de medidas antifraude del Departamento han utilizado la matriz *ex ante* del instrumento de autoevaluación para la identificación y cobertura del riesgo (matriz de riesgos) de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE). Al no ser un instrumento específico para los fondos MRR, se ha optado por adoptar la matriz de del SNCA, utilizándose ésta en las autoevaluaciones que se realicen a partir de la aprobación de este Plan.



y en todo caso, cuando se haya detectado algún caso de fraude o haya cambios significativos en los procedimientos o en el personal.



6. ESTRUCTURACIÓN Y DEFINICIÓN DE LAS MEDIDAS ANTIFRAUDE

Con la evaluación inicial del riesgo de fraude ya realizada, se articulan medidas adecuadas, proporcionadas y estructuradas en torno a las **cuatro áreas clave** del ciclo de lucha contra el fraude: **prevención, detección, corrección y persecución**, que permitirán evitar o minimizar los riesgos de fraude identificados.

La normativa española vigente en la actualidad ya configura un marco regulatorio que garantiza un punto de partida sólido en materia de prevención, detección y corrección del conflicto de intereses, el fraude y la corrupción. No obstante, es preciso adaptar esos mecanismos ya existentes mediante una serie de medidas diseñadas a partir de un planteamiento proactivo, sistematizado y específico para gestionar el riesgo, de manera que se cumpla con las exigencias comunitarias, expresamente recogidas, con carácter general, en el artículo 61 y 129 del Reglamento Financiero 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y específicamente en el ámbito del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en el artículo 22 del Reglamento del MRR.

Este marco normativo aplicable a las operaciones cuya ejecución resulte necesaria para alcanzar los objetivos establecidos, incorpora regulaciones tendentes a evitar el fraude, la corrupción, el conflicto de intereses y la doble financiación, que, en caso de las subvenciones públicas, no solo alcanza a la doble financiación comunitaria, sino a cualquier exceso de financiación que pudiera producirse con independencia de su origen. Destacan en este punto la legislación de contratos del sector público, la de subvenciones o la del régimen jurídico del sector público y procedimiento administrativo común, entre otras.

6.1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN

6.1.1. Desarrollo de una Cultura Ética.

Desarrollar una cultura contra el fraude es fundamental para disuadir a los defraudadores y para conseguir el máximo compromiso posible del personal para combatir el fraude, a través del **fomento de los valores de integridad, objetividad, rendición de cuentas y honradez**. Para ello resulta indispensable el conocimiento de todo el personal de las obligaciones que se establecen en la normativa de aplicación.

En la creación de esta cultura, la **Ley 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y Ética Pública** en su artículo 5 establece como objetivos generales en esta materia tanto "a)



Promover y fortalecer las medidas para garantizar la integridad y la ética públicas combatiendo eficazmente cualquier modalidad de corrupción y de clientelismo”, como “i) Establecer y fomentar el cumplimiento de los códigos de conducta de los empleados públicos”.

Asimismo, se prevé la creación de la Agencia de Integridad y Ética Públicas como ente público dependiente directamente de las Cortes de Aragón que asume las competencias establecidas en dicha ley para la garantía, coordinación e impulso de la integridad y la ética públicas en Aragón, ente que se encuentra en estos momentos pendiente de constitución.

Otras previsiones legales también apoyan esta cultura, como todo el Capítulo II del Título IV de la Ley 11/2023, de 30 de marzo, de uso estratégico de la contratación pública de la Comunidad Autónoma de Aragón dedicado a la integridad y transparencia de la contratación pública, pudiendo destacar, además, la previsión del artículo 92 que, en su apartado 3, establece que ni quien ostente un cargo electo o de designación política, ni las personas titulares de los órganos de contratación ni el personal eventual podrá formar parte de las mesas de contratación.

En el mismo sentido, la previsión del artículo 24.3 del **texto refundido de la Ley de Subvenciones de Aragón**, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2023, de 3 de mayo, del Gobierno de Aragón, en relación a las comisiones de valoración, indica que *“No podrán formar parte de la Comisión de Valoración los cargos electos y el personal eventual (...)”.*

Este marco normativo es reforzado por la **Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón**, pudiendo destacar el cumplimiento del principio de gobernanza y la creación del Consejo de Transparencia de Aragón por Decreto 32/2016, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y de Funcionamiento del Consejo de Transparencia de Aragón, como órgano colegiado, que con independencia, orgánica y funcional, tiene encomendada la promoción de la transparencia de la actividad pública en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Como complemento indispensable de la norma anterior, la **Ley 6/2017, de 15 de junio, de Cuentas Abiertas de Aragón**, es una garantía de transparencia mediante la puesta a disposición de la información de las cuentas bancarias donde se deposita el dinero.



Y de otro lado, en la **Ley 5/2021, de 29 de junio, de Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón**, se incorpora el principio de publicidad de todos los convenios o acuerdos en el Registro Electrónico de Convenios y órganos de cooperación de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus modificaciones, prórrogas o extinciones, así como su publicación en el Boletín Oficial de Aragón.

Asimismo, se destacan las actuaciones que se incluyeron en materia de integridad y ética públicas en el **Plan de Inspección de Servicios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón para los años 2021-2024** aprobado por Acuerdo del Gobierno de Aragón en sesión de 19 de mayo 2021 (BOA de 2 de junio de 2021) tendentes a lograr un Sistema de Integridad institucional.

A lo anterior se añade la pretensión de establecer y garantizar el cumplimiento de unos estándares de conducta por parte de todas las empleadas y empleados que sean acordes con la dimensión pública de la organización, a fin de promover la ejemplaridad a través de la integridad, salvaguardar la imagen de la institución, reforzar su eficiencia y garantizar que la confianza de la ciudadanía en las instituciones no sufra menoscabo alguno, para lo que son necesarias las siguientes medidas:

a El establecimiento de un Código de conducta de los empleados públicos.

La Ley 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y Ética Públicas incorpora en sus artículos 42, 43 y 44 un Código de Conducta y Estatuto de las empleadas y empleados públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, sin perjuicio del que resulta aplicable, con carácter general, recogido en el Capítulo VI, dedicado a los *“Deberes de los empleados públicos”*, del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

De acuerdo con lo anterior, las empleadas y empleados públicos *“Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público”* y *“No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas”*.

Asimismo, se debe mencionar la aplicación del régimen de incompatibilidades previsto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del



Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, correspondiendo la tramitación de las solicitudes de autorización o reconocimiento de compatibilidad a la Inspección General de Servicios y su resolución a la Dirección General de Función Pública y Calidad de los Servicios, siendo objeto de publicación en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón.

b El establecimiento de un Código de buen gobierno de las autoridades y cargos del sector público autonómico.

Dirigido a las autoridades y cargos del sector público autonómico, en los artículos 40 y 41 de la Ley 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y Ética Públicas, se establecen los principios de buen gobierno y de conducta que deberán respetar en el ejercicio de sus funciones, así como la obligación de gestionar los recursos humanos, económicos y materiales siguiendo los principios de eficiencia y sostenibilidad. El régimen de incompatibilidades previsto en esta norma que afecta a estos cargos es aplicado a través de la Secretaría General de La Presidencia.

De igual forma, a los miembros del Gobierno y altos cargos les resultan de aplicación los principios de buen gobierno previstos en el artículo 26 de la Ley 19/2013, de 9 diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

La Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón incorpora en su artículo 13, obligaciones de transparencia política, tales como la publicación de la información sobre los miembros del Gobierno, altos cargos y máximos responsables que consta en el Registro de actividades y bienes y derechos patrimoniales de los miembros del gobierno y de los altos cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como de los acuerdos adoptados por sus órganos de gobierno que tengan especial relevancia. Asimismo, establece la obligación de que todas las Administraciones públicas aragonesas publiquen las agendas de actividad institucional de los miembros del Gobierno y de los altos cargos y máximos responsables incluyendo las reuniones que los mismos mantengan con lobistas y lobbies, la relación del personal de confianza o asesoramiento especial en cada uno de los departamentos y en los organismos públicos o entidades públicas, así como



la información de las campañas de publicidad institucional que hayan promovido o contratado.

Los **códigos referidos**, que constan en los **Anexos VI y VII** de este Plan, se publicarán en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón y en la Intranet corporativa, para su general conocimiento y serán objeto de difusión en el entorno de trabajo, así como hacia las personas beneficiarias de ayudas o que interactúen con el Departamento de Educación, Cultura y Deporte. Adicionalmente, desde el puesto de Coordinador/a de Fondos Europeos del Departamento, se trasladará mediante correo electrónico a los empleados y empleadas del Departamento que intervengan en la gestión de los fondos, la aprobación de este Plan de Medidas Antifraude, haciendo hincapié en la existencia de estos códigos.

- c Por último, como obligación a cumplimentar, **todas las personas beneficiarias de ayudas públicas, contratistas y subcontratistas deberán firmar la declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del PRTR** que se incorpora, en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, de acuerdo con el **Anexo V** de este Plan. Esta obligación se incorporará a las diferentes convocatorias de ayudas y licitaciones de contratación correspondientes.

6.1.2. Formación y concienciación para toda la organización e implicación por las autoridades de la organización.

Las actividades de formación pueden resultar de gran utilidad a la hora de prevenir y detectar el fraude, señalándose en el Anexo III.C de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, que deberán dirigirse a todos los niveles jerárquicos, implicando, no solo a los empleadas y empleados, sino a las autoridades y cargos públicos de la organización.

El **Instituto Aragonés de Administración Pública** viene desarrollando diferentes actividades formativas relacionadas con la Ética pública y la Gobernanza, así como sobre la gestión concreta de los Fondos Next Generation UE si bien, con el fin de reforzar esta estrategia, está diseñando un **programa integral específico de acciones formativas con especial atención, no solo a la prevención, sino también a la detección, corrección y persecución del fraude y, en especial de la gestión de los posibles conflictos de intereses** que permita que todo el personal conozca las



modalidades de conflicto, las formas de evitarlo, la normativa vigente y el procedimiento a seguir en el caso de que se detecte un posible conflicto de intereses.

A este programa, se le dará suficiente difusión para lograr la máxima participación, en especial la del personal que, directa o indirectamente, participa en la gestión de estos fondos europeos. El programa consistirá en el desarrollo de acciones formativas, dirigidas a todos los niveles de organización tales como seminarios y charlas formativas, autoformación y píldoras informativas a través de vídeos institucionales sobre diferentes temáticas en relación con el fraude y la corrupción con la finalidad de concienciar de la cultura contra el fraude y capacitar al personal con unos aprendizajes que ayuden a detectar y prevenir el fraude. Adicionalmente, desde el puesto de Coordinador/a de Fondos Europeos del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, se comunicará mediante correo electrónico a los empleados y empleadas del Departamento que intervengan en la gestión de los fondos, la convocatoria de las acciones formativas de las que se tenga conocimiento.

Igualmente, el Instituto Aragonés de Administración Pública está implementando la medida de incorporar un **módulo de formación en Ética e Integridad Públicas en los Cursos de Acceso a la condición de personal funcionario.**

Como medio de comunicación de la información de mayor utilidad y relevancia para los gestores del MRR, entre la que se encuentran documentos de ayuda y la formación realizada para su posterior visualización, se ha creado un espacio específico en la Intranet Corporativa “Fondos Next Generation UE” <https://intranet.aragon.es/next-generation-eu>

6.1.3. División de funciones en los procesos de gestión, control y pago.

Se cuenta con un **reparto segregado de funciones y responsabilidades en las actuaciones de gestión, control y pago, separación que se evidencia** de forma visible.

Con carácter general, y de acuerdo con las normas jurídicas de aplicación, se estructura de la siguiente manera:

- corresponde la gestión de los procedimientos administrativos al órgano competente por razón de la materia
- corresponde el control interno, financiero y contable, a la Intervención General



- la ordenación de todos los pagos corresponde a la persona titular del Departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública, por medio de la Tesorería General
- se realiza, asimismo, un control externo a través de la Cámara de Cuentas de Aragón creada mediante Ley 11/2009, de 30 de diciembre, de la Cámara de Cuentas de Aragón.

En este sentido, se ha de dar publicidad a la composición de las mesas de contratación, así como de las comisiones de valoración (Plataforma de contratación del sector público de Aragón y Portal de Subvenciones y Ayudas del Gobierno de Aragón, que, a su vez, se muestran en el Portal de Transparencia).

6.1.4. Sistema de control interno.

Se establecen **dos niveles** de control interno:

- **El primer nivel (nivel 1) de control interno corresponde al Departamento de Educación, Cultura y Deporte.** Este nivel ³ son el conjunto de procedimientos, prácticas y medidas adoptadas para garantizar la legalidad de las operaciones, el cumplimiento de hitos y objetivos y la aplicación de los principios de buena gestión financiera, junto con las medidas que permitan la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de interés y evitar la doble financiación, incluyendo la evaluación de tales riesgos y entre los que se incluye la utilización de sistemas informáticos de gestión y seguimiento de hitos y objetivos establecidos para cada componente del PRTR.

Deberán documentarse el conjunto de tareas en relación al control interno, para el cumplimiento de los objetivos de los subproyectos, así como del resto de principios transversales recogidos en el artículo 2.2 de la Orden HFP 1030/2021, de 29 de septiembre, lo que se hará a través de los manuales de procedimientos correspondientes o documentos equivalentes.

En el marco de esta función de control y al menos una vez al año, se cumplimentarán los test de autoevaluaciones que se recogen en el Anexo II de la Orden HFP 1030/2021, de 29 de septiembre ⁴, sobre aspectos esenciales,

³ En base a la Guía para la aplicación de medidas antifraude en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del SNCA: página 9, apartado "b) Control interno de nivel 1" y página 37, apartado "Descripción de los sistemas de control interno de gestión y de la evaluación de riesgos".

⁴ En base a la Guía de autoevaluación del cumplimiento de los principios establecidos en ejecución del PRTR disponible en la Intranet corporativa del Gobierno de Aragón, en el espacio dedicado a Next Generation UE <https://intranet.aragon.es/gobernanza>



control de gestión, hitos y objetivos, daños medioambientales, conflicto de interés, prevención del fraude y la corrupción y compatibilidad régimen de ayudas de estado y evitar la doble financiación.

Asimismo, dentro de este nivel se incorporarán las determinaciones que se adopten sobre el control de las banderas rojas o indicadores de alerta del fraude conforme a lo previsto en el apartado 6.2.2 de este Plan.

- **El segundo nivel (nivel 2) corresponde**, con carácter general y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 3/2023, de 17 de mayo, del Gobierno de Aragón, **a la Intervención General** como órgano fiscalizador de la actividad económica y financiera de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como centro directivo de la contabilidad pública de la Comunidad Autónoma, y que ejerce sus funciones con plena autonomía e independencia de los órganos sometidos a su fiscalización, con sujeción a los procedimientos previstos en las normas legales y reglamentarias de aplicación.

6.2. MEDIDAS DE DETECCIÓN

Las medidas de prevención no pueden proporcionar una protección completa contra el fraude y, por tanto, se necesitan **sistemas para detectar a tiempo los comportamientos fraudulentos que escapan a la prevención**. En consecuencia, una buena estrategia contra el fraude debe tener presente que es preciso diseñar y ejecutar medidas de detección del fraude.

Para facilitar la detección del fraude es necesario emplear diversas herramientas entre las que se incluyen el uso de bases de datos, la definición de indicadores de fraude o señales de alerta (banderas rojas) así como el establecimiento de mecanismos adecuados y claros para informar de las posibles sospechas del fraude por quienes lo hayan detectado.

6.2.1. Uso de herramientas informáticas o de bases de datos

Toda la documentación (incluida la declaración de ausencia de conflicto de intereses) podrá ser verificada con:



- Información externa (por ejemplo, información proporcionada por personas ajenas a la organización que no tienen relación con la situación que ha generado el conflicto de intereses).
- Comprobaciones realizadas sobre determinadas situaciones con un alto riesgo de conflicto de intereses, basadas en el análisis de riesgos interno o banderas rojas (véase apartado siguiente).
- Controles aleatorios a través del uso de bases de datos. De manera general se consultarán los siguientes sistemas de información:
 - Base Nacional de Subvenciones (BNDS)⁵
 - Plataforma de Contratación del Sector Público⁶
 - Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del sector público (ROLECE)
 - Registro público de contratos de la Comunidad Autónoma de Aragón
 - Base de datos del Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón⁷
- Controles de evaluación de conflicto de interés, a través del análisis sistemático y automatizado del riesgo de conflicto de interés, como MINERVA, conforme lo recogido en este Plan.

Si hay indicios de fraude, en la medida de las posibilidades y con arreglo al principio de proporcionalidad, se podrán consultar otros sistemas de información como:

- de acceso abierto: Inventario de entidades pertenecientes al sector público estatal, autonómico y local (INVENTE), Registros Mercantiles, Registro Público Concursal, LibreBOR, Infocif
- previa suscripción, adhesión o convenio: herramientas propias de licitación, de gestión de incidencias, de subvenciones, herramientas de puntuación de riesgos como ARACHNE⁸, la Plataforma de Intermediación de Datos, el Registro de

⁵ <https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/ge/es/convocatorias>

⁶ <https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma>

⁷ <https://aplicacionesportalaragon.aragon.es/formularios/consulta-convenios.html>

⁸ ARACHNE es una herramienta informática integrada que ha desarrollado la Comisión Europea y que está destinada a la extracción y al enriquecimiento de datos. Su función consiste en ayudar a las autoridades de gestión en los controles administrativos y de gestión que llevan a cabo en el ámbito de los Fondos Estructurales. Véase <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPagId=3587&langId=es>



Titularidades Reales del Colegio de Registradores o la Base de Datos de Titularidad Real del Consejo General del Notariado.

6.2.2. Definición y control de indicadores de fraude o señales de alerta (banderas rojas)

Definición de los indicadores

Para asegurar que los procedimientos de control focalicen la atención sobre los puntos principales de riesgo de fraude es necesaria **la definición de unos indicadores de fraude o señales de alerta (banderas rojas) que sirven como signos de alarma, pistas o indicios de posible fraude**. La existencia de una bandera roja no implica necesariamente la existencia de fraude, pero si indica que una determinada área de actividad necesita atención extra para descartar o confirmar un fraude potencial.

Por indicador de riesgo se entiende aquel hecho que revela información cualitativa o cuantitativa formada por uno o varios datos basados en hechos, opiniones o medidas, constituyéndose en señales de alarma o banderas rojas de la posibilidad de que exista el riesgo⁹, es decir, sin que necesariamente exista.

Se contienen en el **Anexo I.2.** de este Plan, un listado de las banderas rojas más empleadas, que se podrán utilizar para el control de los indicadores que se describe a continuación.

Control de los indicadores

Los indicadores de riesgo (banderas rojas) están recogidos, para cada riesgo, clasificados por métodos de gestión y por tipología de prácticas potencialmente fraudulentas, en la matriz de riesgos (autoevaluación) *ex ante* del SNCA, a la que se refiere el apartado 5 de este Plan.

Los riesgos son analizados *ex ante* para cada método de gestión, por el servicio gestor responsable de cada una de las actuaciones, quien debe comprobar *ex post* si los riesgos analizados en la autoevaluación se han materializado o no.

La **lista de comprobación** de banderas rojas, se recoge en el **Anexo I.2.** de este Plan, y se configura conforme a la siguiente estructura:

⁹ Definición recogida en la Guía para la aplicación de medidas antifraude en la ejecución del PRTR del SNCA, pág. 22.



Procedimiento (identificación del expediente)

Denominación del indicador de riesgo (bandera roja)	¿Se ha detectado en el procedimiento alguna bandera roja de las definidas por el Departamento?			Observaciones	Medidas adoptadas o a adoptar
	Si	No	No aplica		

Nombre, apellidos y puesto de quien la cumplimenta

Firma de quien la cumplimenta

La comprobación ex post se llevará a cabo a nivel de expediente de acuerdo con lo siguiente:

1. En el momento previo a la liquidación en el caso de contratos.
2. En el caso de las subvenciones de concurrencia competitiva, simplificada o no, se realizará en tres momentos:
 - a) Después de la publicación de las bases reguladoras y la orden de convocatoria.
 - b) Tras la presentación, selección y evaluación de las solicitudes presentadas, de forma previa a la resolución definitiva de la convocatoria.
 - c) Tras realizar el último pago y la revisión de la cuenta justificativa.

Las dos primeras comprobaciones tienen carácter global y se realizarán a nivel de expediente de convocatoria, mientras que la tercera comprobación se realizará a nivel de expediente por beneficiaria, pudiéndose establecer comprobaciones aleatorias, en función del volumen de beneficiarias.

3. En el caso de las subvenciones de concesión directa, se realizará:
 - a) En el momento posterior a la emisión de la orden de concesión o a la formalización del convenio.
 - b) Tras realizar el pago y tras la revisión de la cuenta justificativa.
4. En el caso de los convenios de colaboración que no tengan por único objeto la concesión de una subvención se realizará:
 - a) En el momento inmediatamente posterior a la firma del convenio.
 - b) Antes de la resolución del convenio con independencia de cuál sea su causa.



Los correspondientes manuales de procedimiento, o documentos equivalentes, recogerán las verificaciones que se realizan, de acuerdo con las listas de comprobación del **Anexo I.2.**

6.2.3. Mecanismo para informar de las posibles sospechas de fraude.

Canal interno

Mediante Acuerdo de 28 de junio de 2023, del Gobierno de Aragón se aprueba como **mecanismo o canal interno** el **Sistema interno de información sobre las acciones u omisiones previstas en el artículo 2 de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción** (BOA, núm. 159, de 18 de agosto de 2023) que resultará de aplicación a las personas informantes que trabajen en el sector público en los términos de lo dispuesto en el artículo 2.3 de la Ley 5/2021, de 29 de junio, de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón: Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, los organismos autónomos, las entidades de derecho público y los consorcios autonómicos y de acuerdo con lo previsto en el artículo 3 de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, en relación al ámbito personal de aplicación.

Se designa responsable del sistema de información a la **persona titular de la Inspección General de Servicios** quien desempeñará sus funciones de forma independiente y autónoma y no podrá recibir instrucciones de ningún tipo en su ejercicio.

El canal interno de información integrado en el Sistema interno de información de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón permite realizar comunicaciones por escrito, a través de correo postal o a través de cualquier medio electrónico habilitado, o verbalmente, por vía telefónica o a través de sistema de mensajería de voz.

En la página de inicio de la intranet y de la página web del Gobierno de Aragón, en una sección separada y fácilmente identificable, se proporcionará información sobre el canal interno de información, así como sobre los principios esenciales del procedimiento de gestión.

Para desarrollar estas cuestiones se ha aprobado la **Orden HAP/386/2024, de 17 de abril, por la que se establece el protocolo a seguir para la gestión del sistema interno de información sobre acciones u omisiones previstas en el artículo 2 de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que**



informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que recoge en el apartado noveno las fases a seguir, que son las siguientes cuatro:

1. **Recepción:** En el plazo de siete días naturales, la persona responsable del sistema interno ha de notificar al informante sobre la recepción de la comunicación, siempre que se haya proporcionado una dirección postal o electrónica. En el supuesto de acceso al sistema interno de información de forma electrónica, la respuesta automática que éste genera proporciona al usuario un código de identificación alfanumérica que le permite hacer el seguimiento.
2. **Admisión:** Se valorará por la persona responsable del sistema interno de información, la competencia, la verosimilitud de la información presentada y la suficiencia de las evidencias aportadas. En los casos en que la comunicación aportada presente alguna carencia de información, se podrá efectuar un requerimiento. Cuando de la información presentada se deriven indicios de conductas o hechos presumiblemente constitutivos de delito, se trasladará de forma inmediata al Ministerio Fiscal y en el caso de que los hechos afecten a los intereses financieros de la Unión Europea, se remitirá a la Fiscalía Europea.

Procederá la inadmisión en los siguientes supuestos:

- a) En el caso de que no se refiera a acciones u omisiones que se encuentren dentro del ámbito objetivo y/o no guarden relación con la actividad y funcionamiento de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- b) En el caso que la comunicación se presente por personas no incluidas en el ámbito subjetivo.
- c) Cuando carezca de fundamento, verosimilitud o contenido esencial, sea notoriamente falsa, fundada únicamente en opiniones o esté formulada de forma vaga o excesivamente genérica.
- d) Cuando sea manifiestamente repetitiva, salvo que se aprecie nuevas circunstancias de hecho o de derecho que justifiquen una nueva valoración.
- e) Cuando tenga un carácter abusivo o injustificado.
- f) Cuando esté siendo investigada por la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal, Fiscalía Europea o la policía judicial.



g) Cuando de algún otro modo incumplan las condiciones fijadas en esta regulación.

3. Instrucción: Comprenderá todas aquellas actuaciones encaminadas a comprobar la verosimilitud de los hechos relatados. Dicha comprobación se realizará por la persona responsable del sistema interno de información, sin perjuicio de que, en función de los hechos comunicados, se pueda requerir la colaboración de otras personas o unidades administrativas, quienes, en cualquier caso, deberán guardar deber de sigilo y confidencialidad. La persona o personas afectadas por la información tienen los derechos reconocidos en el apartado octavo.

Se actuará con especial sensibilidad a la presunción de inocencia y al honor de las personas afectadas. A fin de garantizar el derecho a la defensa de las personas afectadas, las mismas podrán ser oídas en cualquier momento.

4. Terminación: En el plazo máximo de tres meses a contar desde la recepción de la comunicación, salvo casos de especial complejidad que requieran una ampliación del plazo, en cuyo caso podrá extenderse hasta un máximo de otros tres meses adicionales, el responsable del sistema interno de información ha de emitir un informe con las conclusiones que procedan, declarando finalizada la actuación. El resultado de la misma se ha de enviar a las personas responsables que corresponda de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, los organismos autónomos, las entidades de derecho público y los consorcios autonómicos, así como a la persona informante a no ser que, expresamente, ésta haya renunciado a recibir comunicaciones.

Las decisiones que el responsable del sistema interno de información adopte no son recurribles en vía administrativa ni en vía contencioso-administrativa.

Canal externo

En cuanto al **mecanismo o canal externo** de información para tomar las medidas de protección y apoyo a cualquier persona que comunique o revele infracciones, se indica que será el de la **Autoridad Independiente de Protección del Informante** una vez suscrito el convenio al que se refiere el artículo 24.1.d) de la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales.



Existen, además, diferentes **canales de denuncia**, a través de los que cualquier persona podrá notificar las sospechas de fraude y las presuntas irregularidades que, a ese respecto, pueda haber detectado:

- a **Canal SNCA.** Si se desea poner en conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude hechos que puedan ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados con cargo a los Fondos Europeos, puede utilizar el canal habilitado al efecto por el citado Servicio, y al que se puede acceder a través del enlace: <https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/CA-UACI/SNCA/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx>
- b **La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)** atiende sospechas de fraude o corrupción que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea. Es posible dirigirse a la OLAF por medio de los siguientes canales:
 - En línea, a través del Sistema de Notificación de Fraudes (denuncia anónima, con transmisión de documentos por red de conexión segura) a través del enlace https://fns.olaf.europa.eu/main_es.htm
 - Por correo postal a: *European Commission; European Anti-Fraud Office (OLAF)*; 1040 Brussels; Bélgica.

Se dará **suficiente difusión a estos canales de denuncia**, tanto interna como externa, a través del Portal de Internet del Gobierno de Aragón y de la Intranet corporativa. Adicionalmente, desde el puesto de Coordinador/a de Fondos Europeos del Departamento, se trasladará a los empleados y empleadas públicas que intervienen en la gestión de los fondos, la existencia de estos canales.

Asimismo, la posibilidad de utilización de estos canales se **incluirá en las correspondientes licitaciones de contratación y en las convocatorias de subvenciones.**

6.3. MEDIDAS DE CORRECCIÓN

6.3.1. Procedimiento a seguir al detectarse un posible fraude

El **artículo 6.6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre**, prevé el procedimiento de comunicación y correctivo a aplicar en el supuesto de que se detecte un posible fraude o su sospecha fundada, señalando que la entidad correspondiente deberá:



- a) Suspender inmediatamente el procedimiento, notificar tal circunstancia en el más breve plazo posible a las autoridades interesadas y a los organismos implicados en la realización de las actuaciones y revisar todos aquellos subproyectos o líneas de acción que hayan podido estar expuestos al mismo.
- b) Comunicar los hechos producidos y las medidas adoptadas a la entidad decisora, o a la entidad ejecutora que le haya encomendado la ejecución de las actuaciones, en cuyo caso será ésta la que se los comunicará a la entidad decisora, quien comunicará el asunto a la Autoridad Responsable, la cual podrá solicitar la información adicional que considere oportuna de cara a su seguimiento y comunicación a la Autoridad de Control.
- c) Denunciar, si fuese el caso, los hechos a las Autoridades Públicas competentes, al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, para su valoración y eventual comunicación a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.
- d) Iniciar una información reservada para depurar responsabilidades o incoar un expediente disciplinario.
- e) Denunciar los hechos, en su caso, ante el Ministerio Fiscal, cuando fuera procedente.

Asimismo, **el artículo 6.7 de dicha Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre**, señala que el órgano responsable afectado deberá evaluar la incidencia del posible fraude y su calificación como sistémico o puntual y, en todo caso, retirar los subproyectos o la parte de los subproyectos afectados por el fraude y financiados o a financiar por el MRR.

Por tanto, **en el supuesto de que se detecte un posible fraude, o su sospecha fundada, que afecte al Departamento de Educación, Cultura y Deporte**, desde la Secretaría General Técnica se impulsarán las actuaciones necesarias para que el órgano afectado dentro del Departamento por un posible fraude o su sospecha fundada ponga en marcha estas medidas y, en particular, en la fase de corrección, las contenidas en la letra a) del artículo 6.6 y en el artículo 6.7.

A este respecto, cuando la Secretaría General Técnica del Departamento tenga conocimiento de una información o denuncia de sospecha de fraude, desde el Servicio de Régimen Jurídico y Coordinación Administrativa del Departamento, se recabará toda la información necesaria y evidencias de las que se disponga con el objetivo de facilitar



el posterior análisis del caso. Para ello, solicitará a la persona titular del órgano administrativo responsable del procedimiento administrativo en que se tenga conocimiento de dicha conducta, que recopile toda la documentación que pueda constituir evidencias de dicho fraude y junto con un informe descriptivo de los hechos acaecidos, dé traslado a dicho Servicio de Régimen Jurídico, quien podrá solicitar la documentación o información adicional que estime oportuno a la persona que hubiera puesto en su conocimiento la información inicial.

La detección de razones fundadas de posible fraude comportará la constitución de un grupo de trabajo para la adopción de las medidas que, una vez analizada la información y las evidencias documentales recopiladas, se prevén en los artículos 6.6 y 6.7 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre. Dicho grupo estará coordinado por la persona titular de la Secretaría General Técnica del Departamento y formado por la persona titular de la jefatura de servicio de Gestión Económica, Contratación y Asuntos Generales, la persona titular de la jefatura de servicio de Régimen Jurídico y Coordinación Administrativa y la persona titular del puesto de Coordinador/a de Fondos Europeos, quien actuará como Secretaria.

La aparición de varios de los indicadores denominados “banderas rojas” será uno de los principales criterios para determinar la existencia de fraude. Se considerará fraude sistémico cuando se encuentren evidencias de que el fraude ha podido ser realizado de manera recurrente y en procedimientos similares. Se considerará fraude puntual cuando se considere que se trata de un hecho aislado, que no se ha repetido en otras ocasiones.

Si el posible fraude o su sospecha fundada procediera del Sistema interno de información, al que se ha hecho referencia en el apartado 6.2.3 de este Plan, desde la Secretaría General Técnica se impulsará también que el órgano responsable, afectado por un posible fraude o su sospecha fundada, ponga en marcha las medidas de corrección que se determinen en las conclusiones que se incluyan en **el informe que emita el Inspector General de Servicios**, como responsable de dicho Sistema interno de información.

Como orientaciones sobre la forma de proceder se tendrá en cuenta, como complemento, la **Comunicación 1/2017, de 6 de abril, sobre la forma en la que pueden proceder las personas que tengan conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos y**



operaciones financiados total o parcialmente con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea, del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude¹⁰ y su Anexo¹¹.

6.4. MEDIDAS DE PERSECUCIÓN

6.4.1. Procedimiento para el seguimiento de los potenciales casos de fraude.

En esta fase se subraya la **importancia y obligatoriedad del reporte a las autoridades competentes** y las acciones legales a realizar ante los potenciales casos de fraude así como de **conservar la documentación** relativa al análisis del potencial fraude¹².

En tal sentido, **la Secretaría General Técnica del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, a través de su Servicio de Régimen Jurídico y Coordinación Administrativa, y en coordinación con el puesto de coordinador/a de fondos europeos del Departamento**, se asegurará, para el cumplimiento del ya citado artículo 6.6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, que desde el Departamento se cumplen las medidas de persecución establecidas en las letras b), c) y e) de dicho artículo 6.6, es decir, que:

- Se comunican los hechos producidos y las medidas adoptadas a la Autoridad Responsable, la cual podrá solicitar la información adicional que considere oportuna de cara su seguimiento y comunicación a la Autoridad de Control.
- Se comunican los hechos producidos a las Autoridades competentes, dentro de las cuales se enmarca el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA)¹³ como órgano encargado de coordinar las acciones encaminadas a proteger los intereses financieros de la Unión Europea contra el fraude, en colaboración con la Oficina Europea de Lucha contra el fraude (OLAF).
- Se comunican los hechos a la OLAF a través de su canal según el apartado 6.2.3 *“Mecanismo para informar de las posibles sospechas de fraude”* de este Plan.

¹⁰ <https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Documents/ComunicacionSNCA06-04-2017Canaldenuncias.pdf>

¹¹ <https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Documents/Comunicaci%C3%B3n%20SNCA%206%20de%20abril%20de%202017-Anexo.pdf>

¹² Vid. Artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018.

¹³ En la Comunicación 1/2017, de 6 de abril, sobre la forma en la que pueden proceder las personas que tengan conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados total o parcialmente con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea, se describen aspectos como: los canales establecidos para remitir información, el contenido que debe incluirse en dicha información, las actuaciones que realiza el SNCA o la garantía de confidencialidad.



- Se denuncian los hechos ante la Fiscalía Europea o los Juzgados y Tribunales competentes.

6.4.2. Información reservada y expediente disciplinario.

Ante un caso potencial o confirmado de fraude, y en cumplimiento de la **letra d) del artículo 6.6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre**, se tramitará un procedimiento de información reservada, que implicará un análisis exhaustivo del caso en cuestión, en el que deberán **documentarse todas las actuaciones, pruebas y resoluciones a adoptar**.

Tal y como establece el artículo 55 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, este procedimiento es un **paso previo para determinar**, en su caso, **la apertura de un procedimiento disciplinario**, evitando la apertura precoz de expedientes disciplinarios, sin un mínimo contraste de la realidad con los hechos denunciados.

La información reservada no formará parte del expediente disciplinario, dado que su finalidad consistirá, exclusivamente, en aportar elementos de juicio al órgano competente para fundamentar la decisión de incoar o no el expediente.

Tras la finalización del proceso de información reservada, en aquellos casos en lo que se determine, se incoará un expediente disciplinario a la persona presunta infractora que será tramitado por los órganos competentes conforme a la normativa en materia de régimen disciplinario.

6.4.3. Seguimiento del caso y recuperación de fondos.

Se realizará el seguimiento del caso potencial o confirmado de fraude que pasará por el **control de las investigaciones que se encuentren en curso** como resultado del análisis, notificaciones y denuncias llevadas a cabo de acuerdo con los apartados precedentes.

En caso de recibir respuesta de alguno de las autoridades competentes informadas, se tomarán en consideración las pautas, medidas o recomendaciones aportadas por los mismos.



Además, **cuando proceda, se tramitará la recuperación de fondos** que han sido objeto de apropiación indebida, o que hayan sido vinculados con un potencial fraude o corrupción debiendo procederse al reintegro¹⁴ del dinero correspondiente.

¹⁴ Vid. artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y artículo 47 del texto refundido de la Ley de Subvenciones de Aragón, aprobada por Decreto legislativo 2/2023, de 3 de mayo, del Gobierno de Aragón. La Comisión Europea también podrá solicitar el reintegro de los fondos de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 en caso de fraude, corrupción o conflicto de intereses que afecte a los intereses financieros de la Unión y que no haya corregido el estado miembro.



7. PROCEDIMIENTO PARA ABORDAR EL CONFLICTO DE INTERESES

De acuerdo con el artículo 6.4 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, la disponibilidad de un procedimiento para abordar los conflictos de intereses se configura como una actuación obligatoria para este Departamento.

Al objeto de cumplir con lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 61 del Reglamento Financiero de la UE, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte adoptará las medidas necesarias para evitar las situaciones de conflictos de intereses para lo que se ha tenido en cuenta la Comunicación de la Comisión “*Orientaciones sobre cómo evitar y gestionar las situaciones de conflictos de intereses*” que se refleja en el **Anexo X** de este Plan.

7.1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL CONFLICTO DE INTERESES

A efectos de gestionar la fase de prevención del conflicto de intereses se articulan las siguientes medidas:

7.1.1. Comunicación e información al personal del Departamento de Educación, Cultura y Deporte sobre las distintas modalidades de conflicto de interés y de las formas de evitarlo.

Se dará a conocer a todo el personal en qué consiste el conflicto de intereses, sus diferentes tipos y cómo es posible evitarlo y quién comunicarlo, así como la normativa que resulta de aplicación, entre otras, el Título III del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público cuyo Capítulo VI se dedica a «Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta», previendo en el artículo 53, relativo a los principios éticos, el deber de abstención ante un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público; el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, también relativo a la abstención; la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de transparencia de la actividad pública y participación ciudadana en Aragón; así como el Código de buen gobierno para autoridades y cargos del sector público; el Código de conducta para las empleadas y empleados públicos; y el régimen de conflictos de intereses e incompatibilidades regulados en la Ley 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y Ética Públicas de Aragón.

Asimismo, es preciso destacar el procedimiento y las obligaciones contenidas en el Capítulo II del Título IV de la Ley 11/2023, de 30 de marzo, de uso estratégico de la



contratación pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, que se dedica, en particular, a la integridad en la contratación pública regulando de forma expresa el conflicto de intereses.

7.1.2. Cumplimentación de una Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI)

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.5 i) de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre se establece como una actuación obligatoria la cumplimentación de una Declaración de ausencia de intereses (DACI) por quienes participen en los procedimientos de ejecución del PRTR.

Adicionalmente, la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el PRTR, establece un régimen específico para los decisores de la operación estableciendo en relación con ellos la obligación de realizar un análisis sistemático y automatizado del riesgo de conflicto de interés entre ellos y los participantes en los diferentes procedimientos.

De este modo:

- En el caso de los **decisores de la operación en procedimientos de contratación y subvenciones**. El órgano de contratación unipersonal y miembros del órgano de contratación colegiado de asistencia al órgano de contratación que participen en los procedimientos de contratación en las fases de valoración de ofertas, propuesta de adjudicación y adjudicación del contrato, así como el órgano competente para la concesión de la subvención y los miembros de los órganos colegiados de valoración de solicitudes, en las fases de valoración de solicitudes y resolución de la concesión, **deberán firmar una DACI, conforme a la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero**, según el modelo que se incluye como **Anexo II** en este Plan.

En este supuesto, la DACI deberá ser firmada, una vez conocidas las personas participantes en el procedimiento.

- **El resto de las personas que participen en los procedimientos de contratación y subvenciones, así como en otras formas de ejecución**



como convenios o encargos a medios propios¹⁵ deberán firmar una **DACI, conforme a la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre**, por la que se configura el sistema de gestión del PRTR según el modelo que se incluye en este Plan como **Anexo II**.

En este supuesto, la DACI podrá ser firmada en relación a un conflicto potencial antes de conocer a quienes participan en el procedimiento, pero, si una vez conocidas las personas participantes, se determinase un cambio en la declaración suscrita, se deberá comunicar al superior jerárquico para su análisis y pronunciamiento.

En el supuesto de que un empleado o empleada participe en varias fases del procedimiento, firmará una sola DACI, siendo de aplicación el régimen más restrictivo.

En el caso de órganos colegiados, la declaración deberá ser firmada electrónicamente por todos los miembros de los mismos, sin perjuicio de su reflejo en el acta si se produjera en el desarrollo de la correspondiente sesión.

De otro lado, las personas adjudicatarias de los contratos¹⁶ deberán aportar la DACI con la formalización del contrato, salvo previsión diferente al respecto, y las personas beneficiarias de las subvenciones¹⁷ en el momento de la aceptación de la misma, salvo otra determinación en su normativa aplicable.

7.1.3. Comprobación de la información a través del Análisis sistemático y automatizado del riesgo de conflicto de interés (MINERVA).

El análisis del conflicto de interés se realizará sobre los decisores de la operación que participen en los procedimientos de adjudicación de contratos o de concesión de subvenciones, en el marco de cualquier actuación del PRTR, formen parte o no dichos empleados de una entidad ejecutora o de una entidad instrumental.

¹⁵ El Reglamento Financiero dispone que el conflicto de interés puede concurrir en la ejecución del presupuesto genéricamente, por lo que esta obligación se extiende a cualquier forma de ejecución del presupuesto del MRR.

¹⁶ En el ámbito de la contratación pública tener en cuenta lo indicado en el Anexo III.C.1. b).ii de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, de gestión del PRTR ratificado por la Instrucción de la Junta Consultiva de Contratación Pública de 23 de diciembre, sobre aspectos a incorporar en los expedientes y en los pliegos rectores de los contratos que vayan a financiar con fondos procedentes del PRTR. También de interés, el informe 21/2023, de la Comisión permanente de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.

¹⁷ En el ámbito de las subvenciones tener en cuenta lo indicado en el Anexo III.C.1. b). ii y en el Anexo III.C.1 d).i.B de la Orden HFP 1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del PRTR.



A través de la herramienta informática MINERVA (herramienta informática de *data mining*, con sede en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria), se analizarán las posibles relaciones familiares o vinculaciones societarias, directas o indirectas, en las que pueda haber un interés personal o económico susceptible de provocar un conflicto de interés, entre quienes actúan como decisoras de la operación y las personas participantes en cada procedimiento.

No será necesario realizar el análisis de control de conflicto de interés cuando el destinatario de la subvención sea una entidad ejecutora o instrumental¹⁸.

En el caso de subvenciones de concurrencia masiva (más de cien solicitudes) el análisis de riesgo de conflicto de interés se realizará de acuerdo con lo que establezca la orden de bases reguladoras o la convocatoria concreta de la subvención de acuerdo con lo dispuesto por el Anexo II de la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero.

7.1.4. Cumplimentación de la confirmación de ausencia de Conflicto de Interés.

Una vez realizado el análisis de riesgo de existencia de conflicto de interés a través de la herramienta informática MINERVA, en caso de detección de una bandera roja, se deberá, o bien **confirmar la ausencia del conflicto de interés** conforme al modelo incluido como **Anexo III**, o bien **declarar la correspondiente abstención** en el procedimiento u órgano colegiado procediendo a su comunicación al superior jerárquico conforme al modelo contenido en el **Anexo IV**.

7.1.5. Otras formas de comprobación de información a través de bases de datos

A través de bases de datos de los registros mercantiles, bases de datos de organismos nacionales y de la UE, expedientes de las empleadas y empleados públicos (teniendo en cuenta las normas de protección de datos) o a través de la utilización de otras herramientas de prospección de datos («*data mining*») o de puntuación de riesgos (ARACHNE) a las que se pueda tener acceso.

7.2. MEDIDAS PARA ABORDAR EL CONFLICTO DE INTERESES

Procedimiento general de comunicación al superior jerárquico

Las autoridades y personal afectados por una situación que pudiera implicar la existencia de un conflicto de interés, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 «Abstención», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,

¹⁸ En estos supuestos se firmarán la DACI en su opción de no aplicación de la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero.



en relación con el artículo 33 de la Ley 5/2021, de 29 de junio, de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón, se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, por escrito según el modelo que consta en el **Anexo IV**, para su adecuada constancia, quien, tras llevar a cabo los controles e investigaciones necesarios para aclarar la situación, resolverá lo procedente. En su caso, se podrán llevar a cabo las siguientes actuaciones:

- Adoptar las medidas administrativas y, en su caso, las sanciones disciplinarias que procedan contra la persona empleada presunta infractora en la actuación de conflicto de intereses que no ha cumplido con su obligación de comunicación; en particular se aplicara el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y artículo 34 de la Ley 5/2021, de 29 de junio, de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón, relativo a la recusación.
- Cesar toda la actividad en el asunto y/o declarar nula la actuación afectada por el conflicto de intereses.
- Asimismo, cuando la actuación o conducta sea de naturaleza penal, se deberán comunicar los hechos al Ministerio Fiscal a fin de que éste adopte las medidas pertinentes.

A los cargos y autoridades del sector público autonómico resulta de aplicación las previsiones del artículo 58 de la Ley 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y Ética Públicas que se contienen en el apartado 7.3 de este Plan.

En materia de contratación pública, se deben destacar las previsiones del artículo 103 de la Ley 11/2023, de 30 de marzo, de uso estratégico de la contratación pública, de la Comunidad Autónoma de Aragón, sobre el conflicto de interés, en particular, su apartado cuarto que establece que cuando el conflicto afecte al titular del órgano de contratación, la adopción de las medidas previstas en la misma corresponderá al superior jerárquico o al órgano de gobierno de la institución.

Procedimiento especial a aplicar en el caso de identificación del riesgo de conflicto de interés a través de MINERVA¹⁹ (cuando resulte de aplicación este supuesto).

¹⁹ Consultar como complemento a esta regulación la Guía práctica para la aplicación de la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el PRTR.



1. Corresponderá a quienes sean responsables de operación (al órgano de contratación o al órgano competente para la concesión de la subvención) iniciar el procedimiento de análisis *ex ante* de riesgo de conflicto de interés a través de MINERVA, con carácter previo a la valoración de las ofertas o solicitudes presentadas, en los términos previstos en la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero.

En el supuesto de delegación de competencias, se considerará responsable de la operación al órgano en quien se delegue la competencia de contratación o de concesión de la subvención.

Una vez recibida la información relativa a la identificación de un riesgo de conflicto de interés concretado en una bandera roja de MINERVA, en el plazo de dos días hábiles, el decisor afectado podrá abstenerse.

En este acaso el análisis del riesgo de conflicto de interés se volverá a llevar a cabo respecto de quien sustituya a la persona que, en cumplimiento de este proceso, se haya abstenido en el procedimiento.

2. Si la persona afectada por la identificación de un riesgo de conflicto de interés, concretado en una bandera roja, alegara de forma motivada, ante su superior inmediato jerárquico, que no reconoce la validez de la información, deberá ratificar su manifestación de ausencia de conflicto de interés, mediante la firma, en este momento, de una nueva declaración de “Confirmación de la Ausencia de Conflicto de Interés”, cuya redacción reflejará debidamente la situación planteada y la ausencia de conflicto de interés. Todo ello deberá llevarse a cabo en el plazo de dos días hábiles. Se deberá seguir a tal fin el modelo previsto en el **Anexo III** de este Plan.

Si quien es decisor afectado²⁰ es, a su vez, responsable de la operación procederá de la forma prevista en el párrafo anterior ante su superior inmediato poniendo en su conocimiento el resultado del análisis realizado para que decida sobre la existencia de un conflicto de interés y adopte las medidas precisas, en su caso.

En caso de que no se produjera dicha abstención, quien actúe como responsable de la operación solicitará a MINERVA información adicional de los riesgos detectados,

²⁰ Cuando se trate de cargos y autoridades del sector público resultará de aplicación el artículo 58 de la Ley 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y Ética Públicas y, en caso de actuar como órgano de contratación, el artículo 23 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero de medidas en materia de Contratos del Sector Público Autonómico de Aragón.



indicando, como justificación para la obtención de dichos datos, que la abstención no se ha producido.

La información adicional sobre la situación de riesgo de conflicto de interés identificada que proporcione MINERVA no incorporará la identificación de terceras personas, sino únicamente una descripción de los riesgos.

Esta información adicional se trasladará por el responsable de la operación al superior jerárquico de quien actúe como decisor.

3. De oficio o a instancia del superior jerárquico correspondiente, el responsable de la operación, podrá, así mismo, acudir al comité creado en el seno de la Unidad transitoria para el impuso y apoyo de la gestión coordinada de los subproyectos a que se refiere el apartado 2 de este Plan, para que emita informe, en el plazo de dos días hábiles, sobre si, a la luz de la información disponible, procede o no la abstención en el caso concreto.

Por su parte, este comité podrá solicitar informe con la opinión de la Unidad de la Intervención General de la Administración del Estado a la que se hace referencia en el artículo 8 de la Orden HFP 55/2023, de 24 de enero, a efectos de emitir su informe. En este caso, la opinión deberá emitirse en el plazo de dos días hábiles que se añadirán al plazo contemplado en el párrafo anterior.

A la vista de la información adicional proporcionada por MINERVA, de la alegación motivada del decisor afectado y en su caso, del informe del Comité, el superior jerárquico del decisor afectado resolverá, de forma motivada:

- a) Aceptar la participación en el procedimiento del decisor señalado en la bandera roja.
- b) Ordenar al decisor señalado en la bandera roja que se abstenga. En este caso, el órgano responsable de operación repetirá el proceso, de manera que el análisis del riesgo de conflicto de interés se volverá a llevar a cabo respecto de quien sustituya a la persona que, en cumplimiento de este proceso, se haya abstenido en el procedimiento.

4. El responsable de operación será responsable de que se dé de alta en la aplicación CoFFEE la documentación relativa a la alegación motivada de ausencia de conflicto de interés, la circunstancia de la abstención, la información adicional proporcionada por MINERVA, el informe del Comité Antifraude y la decisión adoptada por el superior



jerárquico, a los efectos de las posibles auditorías a llevar a cabo por las autoridades de auditoría del MRR competentes.

5. En el caso de detectarse una bandera negra por no existir información sobre el riesgo de conflicto de interés, por no disponer de datos, se solicitará por el órgano de contratación o subvenciones para que sea aportada en el plazo de cinco días hábiles desde que se formule la solicitud de información. La falta de entrega de dicha información en el plazo señalado será motivo de exclusión del procedimiento en el que se esté participando. En estos casos, el procedimiento a seguir será el previsto en el artículo 7 de la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero.

7.3. EL CONFLICTO DE INTERESES Y LAS AUTORIDADES Y CARGOS DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

Conforme establece **en artículo 58 de la Ley 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y Ética Públicas**, las autoridades y cargos del sector público autonómico vienen obligados a abstenerse del conocimiento de los asuntos en los que pudieran incurrir en conflicto de intereses y, en todo caso, en aquellos asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido alguna parte ellos, su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad, o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad y, en los dos años anteriores a su toma de posesión como cargo público.

Cuando esté obligados a abstenerse en los términos previstos en dicha ley, en la normativa reguladora del régimen jurídico del sector público o en cualquier otra ley, la abstención se producirá por escrito para su adecuada expresión y constancia y se notificará al superior inmediato del alto cargo o al órgano que lo designó, quien decidirá sobre la procedencia de la misma. En todo caso, esta abstención será comunicada por el interesado, en el plazo de un mes, al Registro de actividades de las autoridades y cargo del sector público autonómico para su constancia.

A los efectos anteriores, las autoridades y altos cargos serán informados de los asuntos o materias sobre las que deberán abstenerse y podrán formular cuantas consultas estimen necesarias.



8. PUBLICIDAD Y EFECTOS Y SEGUIMIENTO

8.1. PUBLICIDAD

Este Plan será objeto de publicación en el apartado específico del Portal de Transparencia de Aragón <https://transparencia.aragon.es/Planificacion> y en el Portal de Internet del Gobierno de Aragón <https://www.aragon.es/-/next-generation-eu-antifraude>.

8.2. EFECTOS

Este Plan resultará de aplicación a todos los proyectos que el Departamento de Educación, Cultura y Deporte, con independencia de su fecha de inicio, desarrolle en ejecución del PRTR y durante la vigencia de este último.

8.3. SEGUIMIENTO

Este Plan será objeto de evaluación del grado de cumplimiento y adecuación de las medidas propuestas lo que permitirá la introducción de las modificaciones que resulten aconsejables. Se realizará con carácter intermedio y final, para lo que se definirán los correspondientes indicadores de seguimiento y resultado que permitan analizar si se han conseguido los resultados esperados.

A estos efectos se seguirá el documento de "Implementación planes antifraude" previsto en el **Anexo VIII** de este Plan.

Asimismo, se llevará a cabo la revisión de la evaluación del riesgo de fraude de conformidad con el artículo 6.5.c) de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, **utilizando la matriz de riesgos del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude²¹, cada dos años**, y, en todo caso, cuando se haya detectado algún caso de fraude o haya cambios significativos en los procedimientos o en el personal.

Ambas actuaciones de seguimiento **serán llevadas a cabo por el Departamento** teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:

- a Identificación de las medidas que son más susceptibles de ser objeto de fraude, como pueden ser aquellas con alta intensidad, alto presupuesto, muchos requisitos a justificar por el solicitante, controles complejos, etc.

²¹ Matriz de riesgo de fraude del SNCA, disponible en el Anexo I de la Guía para la aplicación de medidas antifraude en ejecución del PRTR, disponible en: <https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/CA-UACI/SNCA/Paginas/NormativaDocumentaci%C3%B3n.aspx>



- b Identificación de posibles conflictos de intereses.
- c Resultados de trabajos previos de auditorías internas.
- d Resultados de auditorías de la Comisión Europea o del Tribunal de Cuentas Europeo, en su caso.
- e Casos de fraude detectados con anterioridad.

Los documentos de evaluación y revisión referidos **se comunicarán a la Dirección General de Financiación y Fondos Europeos**, para que realice las funciones previstas en el artículo 27.b) del Decreto 202/2024, de 29 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública, entre las que se encuentran las de supervisión y revisión de los planes antifraude, así como el seguimiento de la ejecución y del cumplimiento de los mismos.



ANEXO I. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE RIESGO

Anexo I.1. RESULTADO DEL TEST DE CONFLICTO DE INTERÉS PREVENCIÓN DEL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN RELATIVO AL ESTÁNDAR MÍNIMO (ANEXO II.B.5 DE LA ORDEN HFP/1030/2021, DE 29 DE SEPTIEMBRE).

La revisión de este test se realiza de manera anual. A continuación, se ofrecen los resultados del último test realizado en el Departamento de Educación, Cultura y Deporte en febrero de 2025.

Pregunta	Grado de cumplimiento			
	4	3	2	1
<p>1. ¿Se dispone de un «Plan de medidas antifraude» que le permita a la entidad ejecutora o a la entidad decisora garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses?</p> <p>El 8 febrero de 2022 se aprobó el primer Plan de medidas antifraude del Departamento, aprobándose el 30 de mayo de 2023 una actualización de éste. En febrero de 2025 se ha previsto la actualización de este último que se publicará en la web del Gobierno de Aragón, estando publicado el anterior en la página del portal de transparencia.</p>	4,00			
<p>2. ¿Se constata la existencia del correspondiente «Plan de medidas antifraude» en todos los niveles de ejecución?</p> <p>El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes cuenta con un Plan Antifraude, cuya última versión es de diciembre de 2024 (disponible en: https://www.educacionfpydeportes.gob.es/eu/dam/jcr:3ce7c61d-04c9-4ddb-bad0-e6e8d50e9ab2/plan-medidas-antifraude.pdf)</p> <p>También cuenta con el correspondiente Plan el Ministerio de Cultura, cuya última revisión es de 30 de mayo de 2024 (disponible en: https://www.cultura.gob.es/en/dam/jcr:5392aaa8-28ce-4ad5-ac6f-a1c456ba53d7/plan-medidas-antifraude-2024.pdf)</p> <p>en los casos en los que la ejecución de los subproyectos, vía subvención, hayan recaído en Entidades Locales, se ha requerido la aprobación y aportación del Plan de medidas antifraude correspondiente.</p>	4,00			
Prevención				
<p>3. ¿Dispone de una declaración, al más alto nivel, donde se comprometa a luchar contra el fraude?</p> <p>Acuerdo de 22 de noviembre de 2021, del Gobierno de Aragón, sobre medidas de prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses en la ejecución de medidas financiadas por el</p>	4,00			



Pregunta	Grado de cumplimiento			
	4	3	2	1
MRR en el marco del PRTR (BOA núm. 261, de 27 de diciembre de 2021).				
<p>4. ¿Se realiza una autoevaluación que identifique los riesgos específicos, su impacto y la probabilidad de que ocurran y se revisa periódicamente?</p> <p>Se ha utilizado hasta la fecha la “herramienta de evaluación de riesgos y lucha contra el fraude” (matriz de riesgos ex ante). Tal y como recoge el plan antifraude del Departamento a partir de su aprobación se utilizará la del SNCA. Se realiza cada 2 años y siempre que se detecte algún caso de fraude y haya cambios de personal (apartado 8.3. del plan de medidas antifraude).</p>	3,68			
<p>5. ¿Se difunde un código ético y se informa sobre la política de obsequios?</p> <p>Sí, la Ley 5/2017 de 1 de junio, de Ética e Integridad Públicas de Aragón regula el código de conducta de los empleados públicos y el código de buen gobierno de las autoridades y cargos del sector público. Estos códigos figuran asimismo en el Plan de medidas antifraude del Departamento, en los anexos V y VI.</p>	4,00			
<p>6. ¿Se imparte formación que promueva la Ética Pública y que facilite la detección del fraude?</p> <p>Se realiza formación por parte del IAAP, habiéndose asistido parte del personal, entre otros, a los cursos sobre <i>Las políticas de integridad para la gestión de los fondos europeos: los planes de medidas antifraude</i>.</p> <p>Así mismo, parte del personal ha recibido formación sobre <i>La Ética del servicio público: La corrupción y su combate: los sistemas o marcos de integridad. Los marcos de integridad institucionales</i>.</p> <p>En los cursos de nuevo ingreso de personal funcionario, se imparte un módulo denominado <i>Integridad y ética en el empleo público</i> y otro sobre <i>los planes antifraude</i>.</p>	2,62			
<p>7. ¿Se ha elaborado un procedimiento para tratar los conflictos de intereses?</p> <p>Sí, se ha incluido en el apartado 7 del Plan de medidas antifraude.</p>	4,00			
<p>8. ¿Se cumplimenta una declaración de ausencia de conflicto de intereses por todos los intervinientes?</p> <p>Sí, se ha incluido el modelo de declaración en el Plan de medidas antifraude (Anexo II) y se han cumplimentado y suscrito las pertinentes declaraciones en todos los expedientes con cargo al PRTR.</p>	4,00			
Detección				
<p>9. ¿Se han definido indicadores de fraude o señales de alerta (banderas rojas) y se han comunicado al personal en posición de detectarlos?</p> <p>Si, tal y como consta en el Anexo I del Plan de medias antifraude.</p>	4,00			
<p>10. ¿Se utilizan herramientas de prospección de datos o de puntuación de riesgos?</p>	3,54			



Pregunta	Grado de cumplimiento			
	4	3	2	1
En la mayoría de los Servicios se ha usado una matriz de riesgos, tal y como se refleja en el Plan de medidas antifraud. Si bien alguno señala no haber usado una matriz <i>ex ante</i> , recoge que va a generalizarse su uso.				
11. ¿Existe algún cauce para que cualquier interesado pueda presentar denuncias? Existen tres canales de denuncia, recogidos en el apartado 6.2 del Plan de medidas antifraude.	4,00			
12. ¿Se dispone de alguna Unidad encargada de examinar las denuncias y proponer medidas? Se recoge en el apartado 6.2.3. del Plan de medidas antifraude.	4,00			
Corrección*				
13. ¿Se evalúa la incidencia del fraude y se califica como sistémico o puntual? No se ha detectado ningún indicio de fraude por el momento.				
14. ¿Se retiran los proyectos o la parte de los mismos afectados por el fraude y financiados o a financiar por el MRR? No se ha detectado ningún indicio de fraude por el momento.				
Persecución*				
15. ¿Se comunican los hechos producidos y las medidas adoptadas a la entidad ejecutora, a la entidad decisora o a la Autoridad Responsable, según proceda? No se ha detectado ningún indicio de fraude por el momento.				
16. ¿Se denuncian, en los casos oportunos, los hechos punibles a las Autoridades Públicas nacionales o de la Unión Europea o ante la fiscalía y los tribunales competentes? No se ha detectado ningún indicio de fraude por el momento.				
Subtotal puntos	43,22	2,62	0,00	0,00
Puntos totales	45,84			
Puntos máximos	48,00			
Puntos relativos (puntos totales/puntos máximos)	0,95			

Nota: 4 equivale al máximo cumplimiento, 1 al mínimo.

* Dado que no se han detectado indicios de fraude, estas cuestiones no se han cumplimentado.

El resultado del test es de **45,84 puntos totales sobre 48 máximos**, lo que comporta un **valor de 0,95 puntos relativos**, es decir, **un 95%**.

El resultado es fruto de las autoevaluaciones realizadas por los Servicios que gestionan fondos MRR en el Departamento de Educación, Cultura y Deporte. Éste cuenta con un informe, a modo de nota metodológica, sobre la elaboración del Anexo II de la Orden HFP/1030, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de



gestión del PRTR en el Departamento de Educación, Cultura y Deporte, en la que se detalla cómo se integran las puntuaciones de los Servicios en la elaboración del Anexo del Departamento.

Anexo I.2. LISTA DE COMPROBACIÓN DE LOS INDICADORES DE RIESGO (BANDERAS ROJAS)

A continuación, se relacionan para cada método de gestión las listas de comprobación de los indicadores de riesgo (banderas rojas) definidos en la matriz de autoevaluación que utiliza el Departamento de Educación, Cultura y Deporte, tal y como se señala en el apartado 5 de este Plan.

Estos indicadores de riesgo (banderas rojas), se valoran *ex ante* en la citada matriz y deben volver a ser valorados *ex post*, de manera que se pueda comprobar si el riesgo se ha materializado o no.

Para ello, el servicio gestor responsable deberá realizar el análisis, en cada método de gestión, de los indicadores de riesgo (banderas rojas) relacionados en cada una de las listas de comprobación recogidas en este anexo. Estas listas de comprobación recogen, para cada uno de los riesgos, los indicadores de riesgo (banderas rojas) que deben ser valorados.

La comprobación *ex post* se realiza a nivel de expediente conforme a lo recogido en el apartado 6.2.2 de este Plan, de acuerdo con lo siguiente:

- a. En el momento previo a la liquidación en el caso de contratos.
- b. En el caso de las subvenciones de concurrencia competitiva, simplificada o no, se realizará en tres momentos:
 - Después de la publicación de las bases reguladoras y la orden de convocatoria.
 - Tras la presentación, selección y evaluación de las solicitudes presentadas, de forma previa a la resolución definitiva de la convocatoria.
 - Tras realizar el último pago y la revisión de la cuenta justificativa.

Las dos primeras comprobaciones tienen carácter global y se realizarán a nivel de expediente de convocatoria, mientras que la tercera comprobación



se realizará a nivel de expediente por beneficiaria, pudiéndose establecer comprobaciones aleatorias, en función del volumen de beneficiarias

- c. En el caso de las subvenciones de concesión directa, se realizará:
 - En el momento posterior a la emisión de la orden de concesión o a la formalización del convenio.
 - Tras realizar el pago y tras la revisión de la cuenta justificativa.
- d. En el caso de los convenios de colaboración que no tengan por único objeto la concesión de una subvención se realizará:
 - En el momento inmediatamente posterior a la firma del convenio
 - Antes de la resolución del convenio con independencia de cuál sea su causa.

Modelo de Lista de comprobación de los indicadores de riesgo (banderas rojas): SUBVENCIONES.

Procedimiento (identificación del expediente):					
Denominación del indicador de riesgo (bandera roja)	¿Se ha detectado en el procedimiento alguna bandera roja de las definidas por el Departamento?			Observaciones	Medidas adoptadas o a adoptar
	Si	No	No aplica		
S.R1. Limitación de la concurrencia					
Insuficiente difusión de las bases reguladoras y convocatoria					
No se han definido con claridad en las bases reguladoras o en la convocatoria los requisitos que deben cumplir los beneficiarios o destinatarios de las ayudas o subvenciones					
No se han respetado los plazos establecidos en las bases reguladoras y convocatoria para la presentación de solicitudes					
Ausencia de publicación de los baremos fijados para la valoración de las solicitudes en el Boletín Oficial y en el trámite correspondiente					
El beneficiario o destinatario de las ayudas incumple la obligación de garantizar la concurrencia en caso de que necesite negociar con proveedores					
SR.2. Trato discriminatorio en la selección de solicitantes					



Modelo de Lista de comprobación de los indicadores de riesgo (banderas rojas): SUBVENCIONES.

Procedimiento (identificación del expediente):					
Denominación del indicador de riesgo (bandera roja)	¿Se ha detectado en el procedimiento alguna bandera roja de las definidas por el Departamento?			Observaciones	Medidas adoptadas o a adoptar
	Si	No	No aplica		
Incumplimiento de los principios de objetividad, igualdad y no discriminación en la selección de beneficiarios					
SR.3. Conflictos de interés en la Comisión de Evaluación					
Influencia deliberada en la evaluación y selección de los beneficiarios					
SR.4. Incumplimiento del régimen de ayudas de Estado					
Las bases reguladoras de la convocatoria no indican que se trata de una ayuda de Estado, en su caso					
Las operaciones financiadas constituyen ayudas de Estado y no se ha seguido el procedimiento de información y notificación establecido al efecto por la normativa europea					
SR.5. Desviación del objeto de subvención					
Las bases reguladoras o convocatoria no mencionan el componente y la reforma e inversión ni los hitos y objetivos a cumplir					
Los fondos no han sido destinados a la finalidad establecida en la normativa reguladora de la subvención por parte del beneficiario					
Las bases reguladoras o convocatoria no recogen el cumplimiento del principio de "no causar un daño significativo"					
Las bases reguladoras o convocatoria no recogen el cumplimiento del coeficiente de etiquetado verde y digital que se ha asignado en el PRTR					
SR.6. Doble financiación					
Exceso en la cofinanciación de los proyectos/subproyectos/líneas de acción					
Existen varios cofinanciadores que financian el mismo proyecto/subproyecto/línea de acción					
No existe documentación soporte de las aportaciones realizadas por terceros (convenios, donaciones, aportaciones dinerarias de otra naturaleza, etc.)					



Modelo de Lista de comprobación de los indicadores de riesgo (banderas rojas): SUBVENCIONES.

Procedimiento (identificación del expediente):					
Denominación del indicador de riesgo (bandera roja)	¿Se ha detectado en el procedimiento alguna bandera roja de las definidas por el Departamento?			Observaciones	Medidas adoptadas o a adoptar
	Si	No	No aplica		
La financiación aportada por terceros no es finalista y no existe un criterio de reparto de la misma					
SR.7. Falsedad documental					
Documentación falsificada presentada por los solicitantes					
Manipulación del soporte documental de justificación de los gastos					
SR.8. Incumplimiento de las obligaciones en materia de información, comunicación y publicidad.					
Incumplimiento de los deberes de información y comunicación del apoyo del MRR a las medidas financiadas					
Incumplimiento del deber de identificación del perceptor final de los fondos en una base de datos única					
SR.9. Pérdida de pista de auditoría					
La convocatoria no define de forma clara y precisa los gastos elegibles					
La convocatoria no establece con precisión la forma en que deben documentarse los distintos gastos					
No se ha realizado una correcta documentación de las actuaciones que permita garantizar la pista de auditoría en las diferentes fases					
Incumplimiento de la obligación de conservación de documentos					
La convocatoria no recoge la sujeción a los controles de los organismos europeos					

Nombre, apellidos y puesto de quien la cumplimenta

Firma de quien la cumplimenta



Modelo de Lista de comprobación de los indicadores de riesgo (banderas rojas): CONTRATACIÓN.

Procedimiento (identificación del expediente):	
------------------------------------------------	--

Denominación del indicador de riesgo (bandera roja)	¿Se ha detectado en el procedimiento alguna bandera roja de las definidas por el Departamento?			Observaciones	Medidas adoptadas o a adoptar
	Si	No	No aplica		
C.R1. Limitación de la concurrencia					
Pliegos de cláusulas técnicas o administrativas redactados a favor de un licitador					
Los pliegos presentan prescripciones más restrictivas o más generales que las aprobadas en procedimientos previos similares					
Presentación de una única oferta o el número de licitadores es anormalmente bajo, según el tipo de procedimiento de contratación					
El procedimiento de contratación se declara desierto y vuelve a convocarse a pesar de que se recibieron ofertas admisibles de acuerdo con los criterios que figuran en los pliegos					
La publicidad de los procedimientos es incompleta, irregular o limitada y/o insuficiencia o incumplimiento de plazos para la recepción de ofertas					
Reclamaciones de otros licitadores					
Elección de tramitación abreviada, urgencia o emergencia, o procedimientos de contratación menos competitivos de forma usual y sin justificación razonable					
C.R2. Prácticas colusorias en las ofertas					
Posibles acuerdos entre los licitadores en complicidad con empresas interrelacionadas o vinculadas o mediante la introducción de "proveedores fantasma"					
Posibles acuerdos entre los licitadores en los precios ofertados en el procedimiento de licitación					
Posibles acuerdos entre los licitadores para el reparto del mercado					
El adjudicatario subcontrata con otros licitadores que han participado en el procedimiento de contratación					



Modelo de Lista de comprobación de los indicadores de riesgo (banderas rojas): CONTRATACIÓN.

Procedimiento (identificación del expediente):	
------------------------------------------------	--

Denominación del indicador de riesgo (bandera roja)	¿Se ha detectado en el procedimiento alguna bandera roja de las definidas por el Departamento?			Observaciones	Medidas adoptadas o a adoptar
	Si	No	No aplica		
Oferta ganadora demasiado alta en comparación con los costes previstos o con los precios de mercado de referencia					
Similitudes entre distintos licitadores referidas a la presentación de ofertas, documentos presentados en la licitación así como en las declaraciones y comportamientos de los licitadores					
Retirada inesperada de propuestas por parte de distintos licitadores o el adjudicatario no acepta el contrato sin existir motivos para ello					
C.R3. Conflicto de interés					
Comportamiento inusual por parte de un empleado que insiste en obtener información sobre el procedimiento de licitación sin estar a cargo del procedimiento					
Empleado del órgano de contratación ha trabajado para una empresa licitadora recientemente					
Vinculación familiar entre un empleado del órgano de contratación con capacidad de decisión o influencia y una persona de la empresa licitadora					
Reiteración de adjudicaciones a favor de un mismo licitador					
Aceptación continuada de ofertas con precios elevados o trabajo de calidad insuficiente					
Miembros del órgano de contratación que no cumplen con los procedimientos establecidos en el código de ética del organismo					
Empleado encargado de contratación declina ascenso a una posición en la que deja de tener que ver con adquisiciones					
Indicios de que un miembro del órgano de contratación pudiera estar recibiendo contraprestaciones indebidas a cambio de favores relacionados con el procedimiento de contratación					



Modelo de Lista de comprobación de los indicadores de riesgo (banderas rojas): CONTRATACIÓN.

Procedimiento (identificación del expediente):	
------------------------------------------------	--

Denominación del indicador de riesgo (bandera roja)	¿Se ha detectado en el procedimiento alguna bandera roja de las definidas por el Departamento?			Observaciones	Medidas adoptadas o a adoptar
	Si	No	No aplica		
Socialización entre un empleado encargado de contratación y un proveedor de servicios o productos					
Comportamientos inusuales por parte de los miembros del órgano de contratación					
Empleado encargado de contratación no presenta declaración de ausencia de conflicto de interés o lo hace de forma incompleta					
C.R4. Manipulación en la valoración técnica o económica de las ofertas presentadas					
Los criterios de adjudicación no están suficientemente detallados o no se encuentran recogidos en los pliegos					
Los criterios de adjudicación son discriminatorios, ilícitos o no son adecuados para seleccionar la oferta con una mejor calidad-precio					
El objeto del contrato y prescripciones técnicas definidos en los pliegos no responden al componente y la reforma o inversión ni a los hitos y objetivos a cumplir					
Los criterios de adjudicación incumplen o son contrarios al principio de "no causar un daño significativo" y al etiquetado verde y digital					
Aceptación de ofertas anormalmente bajas sin haber sido justificada adecuadamente por el licitador					
Ausencia o inadecuados procedimientos de control del procedimiento de contratación.					
Cambios en las ofertas después de su recepción					
Ofertas excluidas por errores o por razones dudosas					
Quejas de otros licitadores					
Procedimiento que no se declara desierto y continúa con su tramitación pese a que se han recibido menos ofertas que el número mínimo requerido					



Modelo de Lista de comprobación de los indicadores de riesgo (banderas rojas): CONTRATACIÓN.

Procedimiento (identificación del expediente):	
------------------------------------------------	--

Denominación del indicador de riesgo (bandera roja)	¿Se ha detectado en el procedimiento alguna bandera roja de las definidas por el Departamento?			Observaciones	Medidas adoptadas o a adoptar
	Si	No	No aplica		
C.R5. Fraccionamiento fraudulento del contrato					
Fraccionamiento en dos o más contratos					
Separación injustificada o artificial del objeto del contrato.					
Compras secuenciales por debajo de los umbrales de licitación abierta					
C.R6. Incumplimiento en la formalización del contrato					
El contrato formalizado altera los términos de la adjudicación					
Falta de coincidencia entre el adjudicatario y el firmante del contrato					
Demoras injustificadas para firmar el contrato por el órgano de contratación y el adjudicatario					
Inexistencia de contrato o expediente de contratación					
Falta de publicación del anuncio de formalización					
C.R7. Incumplimientos o deficiencias en la ejecución del contrato					
Incumplimiento total o parcial o cumplimiento defectuoso de las prestaciones objeto del contrato					
Modificaciones de contratos sin cumplir los requisitos legales ni estar justificadas					
Subcontrataciones no permitidas					
El importe total pagado al contratista supera el valor del contrato del contrato					
C.R8. Falsedad documental					
Documentación falsificada presentada por los licitadores en el proceso de selección de ofertas					
Manipulación de la documentación justificativa de los costes o de la facturación para incluir cargos incorrectos, falsos, excesivos o duplicados					
Prestadores de servicios fantasmas					
C.R9. Doble financiación					



Modelo de Lista de comprobación de los indicadores de riesgo (banderas rojas): CONTRATACIÓN.

Procedimiento (identificación del expediente):

Denominación del indicador de riesgo (bandera roja)	¿Se ha detectado en el procedimiento alguna bandera roja de las definidas por el Departamento?			Observaciones	Medidas adoptadas o a adoptar
	Si	No	No aplica		
Se produce doble financiación					

C.R10. Incumplimiento de las obligaciones de información, comunicación y publicidad

Incumplimiento de los deberes de información y comunicación del apoyo del MRR a las medidas financiadas					
Incumplimiento del deber de identificación del perceptor final de los fondos en una base de datos única					

C.R11. Pérdida de la pista de auditoría

No se ha realizado una correcta documentación de las actuaciones que permita garantizar la pista de auditoría					
Incumplimiento de la obligación de conservación de documentos					
No se garantiza el compromiso de sujeción a los controles de los organismos europeos por los perceptores finales					

Nombre, apellidos y puesto de quien la cumplimenta

Firma de quien la cumplimenta



Modelo de Lista de comprobación de los indicadores de riesgo (banderas rojas): CONVENIOS

Procedimiento (identificación del expediente):

Denominación del indicador de riesgo (bandera roja)	¿Se ha detectado en el procedimiento alguna bandera roja de las definidas por el Departamento?			Observaciones	Medidas adoptadas o a adoptar
	Si	No	No aplica		
CV.R1. El objeto del convenio no corresponde a esta figura jurídica					
El convenio tiene por contenido prestaciones propias de los contratos					
Celebración de convenios con entidades privadas					
El contenido del convenio supone la cesión de la titularidad de la competencia					
CV.R2. Incumplimiento del procedimiento o de los requisitos legales del convenio					
Falta de competencia legal					
Las aportaciones financieras no son adecuadas					
Falta de trámites preceptivos					
Incumplimiento de las obligaciones de publicidad y comunicación de los convenios					
Falta de realización de las actuaciones objeto del convenio sin causa justificada o falta de liquidación de las aportaciones financieras					
CV.R3. Conflicto de interés					
Indicios de la existencia de algún tipo de vinculación entre las partes firmantes del convenio					
Convenios recurrentes					
CV.R4. Limitación de la concurrencia en la selección de entidades colaboradoras de derecho privado					
Incumplimiento de la obligación de garantizar la concurrencia y resto de principios aplicables en la selección de la entidad colaboradora de derecho privado					
CV.R5. Limitación de la concurrencia en el caso de ejecución del convenio por terceros					
Incumplimiento de la obligación de garantizar la concurrencia cuando la ejecución del convenio de colaboración se está llevando a cabo por terceros					
CV.R6. Incumplimiento de las obligaciones de información, comunicación y publicidad					
Incumplimiento de los deberes de información y comunicación del apoyo del MRR a las medidas financiadas					



Modelo de Lista de comprobación de los indicadores de riesgo (banderas rojas): CONVENIOS

Procedimiento (identificación del expediente):

Denominación del indicador de riesgo (bandera roja)	¿Se ha detectado en el procedimiento alguna bandera roja de las definidas por el Departamento?			Observaciones	Medidas adoptadas o a adoptar
	Si	No	No aplica		
Incumplimiento del deber de identificación del perceptor final de los fondos en una base de datos única					
CV.R7. Pérdida de pista de auditoría					
Falta de pista de auditoría					
Incumplimiento de la obligación de conservación de documentos					
No se garantiza el compromiso de sujeción a los controles de los organismos europeos por los perceptores finales					

Nombre, apellidos y puesto de quien la cumplimenta

Firma de quien la cumplimenta



Modelo de Lista de comprobación de los indicadores de riesgo (banderas rojas): ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS

Procedimiento (identificación del expediente):

Denominación del indicador de riesgo (bandera roja)	¿Se ha detectado en el procedimiento alguna bandera roja de las definidas por el Departamento?			Observaciones	Medidas adoptadas o a adoptar
	Si	No	No aplica		
MP.R1. Falta de justificación del encargo a medios propios					
Inexistencia de procedimientos para llevar a cabo los encargos a medios propios					
Justificación insuficiente del recurso al encargo a medio propio					
Ejecución de forma paralela de actividades semejantes con recursos propios o de actividades recurrentes que se repiten cada año					
Existencia clara de recursos infrautilizados que podrían destinarse a los proyectos o actuaciones incluidas en el encargo al medio propio					
Falta de justificación de las necesidades a cubrir y del objeto del encargo					
MP.R2. Incumplimiento por el medio propio de los requisitos para serlo					
El medio propio no cumple los requisitos para serlo					
El medio propio no figura publicado en la Plataforma de Contratación					
MP.R3. Falta de justificación en la selección del medio propio					
Falta de una lista actualizada de medios propios					
Concentración de encargos en un medio propio concreto, en el caso de que haya varios					
El objeto del medio propio al que se realiza el encargo no coincide con el tipo de actividades que se le han encargado					
MP.R4. Aplicación incorrecta de las tarifas y costes					
Ausencia de tarifas aprobadas por el órgano competente o falta de actualización cuando proceda					
Aplicación incorrecta de las tarifas aplicadas en la elaboración del presupuesto					



Modelo de Lista de comprobación de los indicadores de riesgo (banderas rojas): ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS

Procedimiento (identificación del expediente):

Denominación del indicador de riesgo (bandera roja)	¿Se ha detectado en el procedimiento alguna bandera roja de las definidas por el Departamento?			Observaciones	Medidas adoptadas o a adoptar
	Si	No	No aplica		
Estimación incorrecta de las unidades a las que se aplican las tarifas en la elaboración del presupuesto					
No se han compensado las actividades subcontratadas					
Aplicación de IVA cuando se trata de una operación no sujeta (artículo 7.8º Ley del IVA)					
MP.R5. Incumplimiento de los límites de subcontratación y limitación de concurrencia					
No se ha informado al ente que realiza el encargo de la subcontratación realizada por el medio propio					
Las actividades subcontratadas superan el límite del 50% del encargo					
El medio propio ha obtenido bajas sustanciales de precio en el procedimiento de licitación que no ha facturado al coste real					
El precio subcontratado supera la tarifa aplicable					
El medio propio subcontrata siempre con los mismos proveedores					
MP.R6. Incumplimiento total o parcial de las prestaciones objeto del encargo					
Retrasos injustificados en los plazos de entrega					
No hay entrega de los productos o no se realiza el servicio, total o parcial					
Servicios o productos entregados por debajo de la calidad esperada					
Falta de adecuación de las prestaciones del encargo con la necesidad administrativa que debe cubrir					
MP.R7. Incumplimiento de las obligaciones de información, comunicación y publicidad					
Incumplimiento del deber de publicación del encargo en la Plataforma de Contratación correspondiente en el caso de encargos de importe superior a 50.000€, IVA excluido					



Modelo de Lista de comprobación de los indicadores de riesgo (banderas rojas): ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS

Procedimiento (identificación del expediente):

Denominación del indicador de riesgo (bandera roja)	¿Se ha detectado en el procedimiento alguna bandera roja de las definidas por el Departamento?			Observaciones	Medidas adoptadas o a adoptar
	Si	No	No aplica		
Incumplimiento de los deberes de información y comunicación del apoyo del MRR a las medidas financiadas					
Incumplimiento del deber de identificación del perceptor final de los fondos en una base de datos única					
MP.R8. Pérdida de pista de auditoría					
Falta de pista de auditoría					
Incumplimiento de la obligación de conservación de documentos					
No se garantiza el compromiso de sujeción a los controles de los organismos europeos por los perceptores finales					

Nombre, apellidos y puesto de quien la cumplimenta

Firma de quien la cumplimenta



ANEXO II

DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERÉS (DACI)²²

Expediente	
Subvención	
Componente PRTR	
Inversión / Reforma	

D./D^a _____, con NIF _____, al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de concesión de subvención referenciado, como participante en el proceso de preparación y tramitación del expediente,

DECLARA:

Primero. Estar informado/a de lo siguiente:

1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que «existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.»
2. Que el apartado 3 de la disposición adicional centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023, establece que «El análisis sistemático y automatizado del riesgo de conflicto de interés resulta de aplicación a los empleados públicos y resto de personal al servicio de entidades decisoras, ejecutoras e instrumentales que participen, de forma individual o mediante su pertenencia a órganos colegiados, en los procedimientos descritos de adjudicación de contratos o de concesión de subvenciones».

²² Modelo de Declaración de ausencia de conflicto de interés conforme al contenido mínimo establecido en el Anexo IV de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y Anexo I de la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.



3. Que, de conformidad con el apartado 4 de la citada disposición adicional centésima décima segunda:
 - A través de la herramienta informática de *data mining*, con sede en la Agencia Estatal de Administración Tributaria de España, MINERVA o cualquier otra que la sustituya en el futuro, se analizarán las posibles relaciones familiares o vinculaciones societarias, directas o indirectas, en las que se pueda dar un interés personal o económico susceptible de provocar un conflicto de interés, entre empleados públicos y resto de personal al servicio de entidades decisoras, ejecutoras e instrumentales que participen, de forma individual o mediante su pertenencia a órganos colegiados, y los solicitantes participantes en cada procedimiento. En particular, este análisis se llevará a cabo para las personas que tengan la consideración de decisores de la operación, de conformidad con el artículo 3.1 de la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
 - «Para la identificación de las relaciones o vinculaciones la herramienta contendrá, entre otros, los datos de titularidad real de las personas jurídicas a las que se refiere el artículo 22.2.d).iii) del Reglamento (UE) 241/2021, de 12 febrero, obrantes en las bases de datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y los obtenidos a través de los convenios suscritos con los Colegios de Notarios y Registradores».
4. Que el artículo 23 «Abstención», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación con el artículo 33 de la Ley 5/2021, de 29 de junio, de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón, establece como causas de abstención:
 - a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser persona administradora de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con alguna persona interesada.
 - b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de las personas interesadas, con las personas administradoras de entidades o sociedades interesadas y también con las personas asesoras, representantes legales o mandatarias que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstas



para el asesoramiento, la representación o el mandato.

- c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.
- d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.
- e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar».

Segundo. Que se encuentra en la siguiente situación:

- En el momento de la firma de esta declaración y a la luz de la información obrante en su poder, no se encuentra incurso en ninguna situación que pueda calificarse de conflicto de interés, en los términos previstos en el apartado cuatro de la disposición adicional centésima décima segunda, que pueda afectar al procedimiento, **siendo de aplicación el análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés conforme dispone la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero.**
- En el momento de la firma de esta declaración y a la luz de la información obrante en su poder, no se encuentra incurso en ninguna situación que pueda calificarse de conflicto de intereses de las indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y que no concurre en su persona ninguna causa de abstención del artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que pueda afectar al procedimiento de licitación, **sin ser de aplicación el análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés por no resultar dentro del ámbito de aplicación de la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero.**

Tercero. Que se compromete a poner en conocimiento del órgano concedente, sin dilación, cualquier situación de conflicto de intereses o causa de abstención que pudiera conocer y producirse en cualquier momento del procedimiento en curso.

Cuarto. Que conoce que, una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que sea falsa, acarreará las consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que establezca la normativa de aplicación.

Y para que conste, se firma la presente declaración.

En _____, a fecha de firma electrónica



DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES (DACI) (PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS)

ORDEN DE CONVOCATORIA:

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento arriba referenciado, la persona firmante como beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), **DECLARA:**

Primero. Estar informada de lo siguiente:

1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que «existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.»
2. Que el apartado 3 de la Disposición Adicional centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023, establece que «*El análisis sistemático y automatizado del riesgo de conflicto de interés resulta de aplicación a los empleados públicos y resto de personal al servicio de entidades decisoras, ejecutoras e instrumentales que participen, de forma individual o mediante su pertenencia a órganos colegiados, en los procedimientos descritos de adjudicación de contratos o de concesión de subvenciones*».
3. Que, de conformidad con el apartado 4 de la citada disposición adicional centésima décima segunda:
 - a) A través de la herramienta informática de *data mining*, con sede en la Agencia Estatal de Administración Tributaria de España, MINERVA o cualquier otra que la sustituya en el futuro, se analizarán las posibles relaciones familiares o vinculaciones societarias, directas o indirectas, en las que se pueda dar un interés personal o económico susceptible de provocar un conflicto de interés, entre empleados públicos y resto de personal al servicio de entidades decisoras, ejecutoras e instrumentales que participen, de forma individual o mediante su pertenencia a órganos colegiados, y los participantes en cada procedimiento. En particular, este análisis se llevará a cabo para las personas que tengan la consideración de decisores de la operación, de conformidad



con el artículo 3.1 de la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

- b) *«Para la identificación de las relaciones o vinculaciones la herramienta contendrá, entre otros, los datos de titularidad real de las personas jurídicas a las que se refiere el artículo 22.2.d).iii) del Reglamento (UE) 241/2021, obrantes en las bases de datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y los obtenidos a través de los convenios suscritos con los Colegios de Notarios y Registradores».*
4. Que el artículo 23 «Abstención», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación con el artículo 33 de la Ley 5/2021, de 29 de junio, de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón, establece como causas de abstención:
- a) *«Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser persona administradora de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con alguna persona interesada.*
- b) *Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de las personas interesadas, con las personas administradoras de entidades o sociedades interesadas y también con las personas asesoras, representantes legales o mandatarias que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstas para el asesoramiento, la representación o el mandato.*
- c) *Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.*
- d) *Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.*
- e) *Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar».*

Segundo. Que se compromete a poner en conocimiento del órgano competente para la concesión de la subvención, sin dilación, cualquier situación de conflicto de intereses o causa de abstención que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.

Y para que conste, se firma la presente declaración.

En....., a fecha de firma electrónica



DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES (DACI) (CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS²³)

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN:

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratación arriba referenciado, la persona firmante, **DECLARA**:

Primero. Estar informada de lo siguiente:

1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que *«existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.»*
2. Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses» de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como el artículo 23 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón tienen el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todas las personas candidatas y licitadoras. Así, tanto este artículo como el artículo 23 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón tienen el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todas las personas candidatas y licitadoras.
3. Que el apartado 3 de la Disposición Adicional centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023, establece que *«El análisis sistemático y automatizado del riesgo de conflicto de interés resulta de aplicación a los empleados públicos y resto de personal al servicio de entidades decisoras, ejecutoras e instrumentales que participen, de forma individual o mediante su pertenencia a órganos colegiados, en los procedimientos descritos de adjudicación de contratos o de concesión de subvenciones».*
4. Que, de conformidad con el apartado 4 de la citada disposición adicional centésima décima segunda:

²³ Modelo disponible como documentación del MRR de los Pliegos tipo de contratación contenida en: <https://www.aragon.es/documents/20127/94256403/DACI+MRR+-+actualizada.pdf/987679b5-1dc6-f418-4e70-dd9f0c956a70?t=1698403084876>



- a) A través de la herramienta informática de *data mining*, con sede en la Agencia Estatal de Administración Tributaria de España, MINERVA o cualquier otra que la sustituya en el futuro, se analizarán las posibles relaciones familiares o vinculaciones societarias, directas o indirectas, en las que se pueda dar un interés personal o económico susceptible de provocar un conflicto de interés, entre empleados públicos y resto de personal al servicio de entidades decisoras, ejecutoras e instrumentales que participen, de forma individual o mediante su pertenencia a órganos colegiados, y los licitadores participantes en cada procedimiento. En particular, este análisis se llevará a cabo para las personas que tengan la consideración de decisores de la operación, de conformidad con el artículo 3.1 de la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
- b) *«Para la identificación de las relaciones o vinculaciones la herramienta contendrá, entre otros, los datos de titularidad real de las personas jurídicas a las que se refiere el artículo 22.2.d).iii) del Reglamento (UE) 241/2021, obrantes en las bases de datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y los obtenidos a través de los convenios suscritos con los Colegios de Notarios y Registradores».*
5. Que el artículo 23 *«Abstención»*, de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación con el artículo 33 de la Ley 5/2021, de 29 de junio, de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón, establece como causas de abstención:
- a) *«Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser persona administradora de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con alguna persona interesada.*
- b) *Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de las personas interesadas, con las personas administradoras de entidades o sociedades interesadas y también con las personas asesoras, representantes legales o mandatarias que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstas para el asesoramiento, la representación o el mandato.*
- c) *Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.*



- d) *Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.*
- e) *Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar».*

Segundo. Que se compromete a poner en conocimiento del órgano de contratación, sin dilación, cualquier situación de conflicto de intereses o causa de abstención que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.

Y para que conste, se firma la presente declaración.

En....., a fecha de firma electrónica



ANEXO III
MODELO DE CONFIRMACIÓN DE LA AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERÉS²⁴

Expediente	
Subvención	
Componente PRTR	
Inversión / Reforma	

D./D^a _____, con NIF _____, al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de concesión de subvención referenciado, como participante en el proceso de preparación y tramitación del expediente,

DECLARO:

Una vez realizado el análisis de riesgo de existencia de conflicto de interés a través de la herramienta informática MINERVA, en los términos establecido en la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dictada en aplicación de la disposición adicional centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, y habiendo sido detectada una bandera roja consistente en (*descripción de la bandera roja, con la relación de solicitantes respecto de los cuales se ha detectado la misma*) me reitero en que no existe ninguna situación que pueda suponer un conflicto de interés que comprometa mi actuación objetiva en el procedimiento.

Y para que conste, se firma la presente confirmación.

En....., a fecha de firma electrónica

²⁴ Modelo de confirmación de la ausencia de conflicto de interés conforme al establecido en el Anexo II de la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.



**ANEXO IV
MODELO DE COMUNICACIÓN DE ABSTENCIÓN**

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 23 «Abstención», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación con el artículo 33 de la Ley 5/2021, de 29 de junio, de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón, (*nombre y apellidos*)
(*cargo*).....
comunico, para su adecuada constancia a mi superior jerárquico inmediato²⁵, mi abstención:

En el procedimiento administrativo:
.....
.....
.....
.....

En la deliberación del órgano colegiado²⁶
..... en la sesión del día en la deliberación del asunto:
.....
.....

2. Dicha abstención viene motivada por:
.....
.....
.....
.....

En, a fecha de firma electrónica

²⁵ En el caso de un cargo o autoridad pública, conforme al artículo 58.2 de la Ley 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y Ética Públicas, se notificará al superior inmediato del alto cargo o al órgano que lo designo.

²⁶ Se especificará el órgano colegiado en el seno de cuyas deliberaciones se produce la abstención. Se entiende que la constancia en acta también equivale a la comunicación al órgano superior.



**ANEXO V
DECLARACIÓN DE COMPROMISO EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN
DE ACTUACIONES DEL PRTR²⁷**

Modelo declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR)

Don/Doña , con DNI , como titular del órgano/ Consejero/a Delegado/a Gerente de la entidad , con NIF , y domicilio fiscal en

..... en la condición de órgano responsable/ órgano gestor/ beneficiario de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que participa como contratista/ente destinatario del encargo/ subcontratista, en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el Componente XX «.....», manifiesta el compromiso de la persona/entidad que representa con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de economía circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiación y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.

....., XX de de 202X

Fdo.

Cargo:

²⁷ Conforme al modelo contenido en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.



ANEXO VI

CÓDIGO DE CONDUCTA DE LAS EMPLEADAS Y EMPLEADOS PÚBLICOS

Dentro de las medidas destinadas a prevenir el fraude, se encuentra la divulgación del Código de conducta de las empleadas y empleados públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón que constituye una herramienta fundamental para transmitir los valores y las pautas de conducta en materia de fraude, recogiendo los principios que deben servir de guía y regir la actividad del personal empleado público.

PRINCIPIOS ÉTICOS FUNDAMENTALES

La actividad diaria del personal del Gobierno de Aragón debe reflejar el cumplimiento de los principios éticos recogidos en los artículos 52 a 54 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que establece lo siguiente:

«CAPÍTULO VI

Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta

Artículo 52. Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta.

Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los principios éticos y de conducta regulados en los artículos siguientes.

Los principios y reglas establecidos en este capítulo informarán la interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos.

Artículo 53. Principios éticos.

1. Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico.
2. Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los



ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio.

3. Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la que presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos.

4. Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

5. Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público.

6. No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto público.

7. No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas.

8. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización.

9. No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo sin justa causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los titulares de los cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros.

10. Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su caso, resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia.

11. Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público



absteniéndose no solo de conductas contrarias al mismo, sino también de cualesquiera otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos.

12. Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés público.

Artículo 54. Principios de conducta.

1. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos.

2. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos.

3. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes.

4. Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

5. Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los mismos en provecho propio o de personas allegadas. Tendrán, así mismo, el deber de velar por su conservación.

6. Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal.

7. Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y entrega a sus posteriores responsables.

8. Mantendrán actualizada su formación y cualificación.

9. Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral.

10. Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las propuestas que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de la unidad en la que estén destinados. A estos efectos se podrá prever la creación de la instancia adecuada competente para centralizar la recepción de las propuestas



de los empleados públicos o administrados que sirvan para mejorar la eficacia en el servicio.

11. Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea oficial en el territorio.

La **Ley 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y Ética Públicas**, recoge, asimismo, en sus artículos 42, 43 y 44 un Código de Conducta y Estatuto de las empleadas y empleados públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón:

«Artículo 42. Principios de actuación

1. Los empleados públicos ajustarán su actuación al código de conducta y a los deberes previstos en esta ley, en la normativa reguladora que les resulte de aplicación y, especialmente, a los principios siguientes:

- a) Legalidad.
- b) Dedicación al servicio público.
- c) Eficacia.
- d) Profesionalidad.
- e) Integridad y responsabilidad.
- f) Transparencia y rendición de cuentas.
- g) Ejemplaridad, austeridad y honradez.
- h) Servicio efectivo al ciudadano.
- i) Fomento y garantía de la igualdad entre hombres y mujeres.
- j) Objetividad, neutralidad e imparcialidad.
- k) Confidencialidad.
- l) Accesibilidad.
- m) Promoción del entorno cultural y medioambiental.

2. Los principios y reglas establecidos en la presente sección informarán la interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos.

Artículo 43. Derechos y deberes.

Los empleados públicos tendrán los derechos y deberes establecidos en la normativa de empleo público que les resulte de aplicación.

Artículo 44. Código de conducta.

1. Los empleados públicos de las Administraciones públicas y el personal perteneciente al sector público incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley, en el



ejercicio de sus funciones y en el desempeño de sus tareas, deberán, en todo caso, ajustar sus actuaciones a los principios éticos y de conducta que conforman el código de conducta de los empleados públicos regulado en el Estatuto Básico del Empleado Público y en la legislación de función pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.

2. El Gobierno de Aragón y los órganos competentes del sector público de Aragón podrán desarrollar dicho código básico de conducta, así como aprobar otros códigos de conducta específicos que desarrollen lo previsto en este capítulo para colectivos de empleados públicos cuando se considere necesario por las peculiaridades del servicio que presten o por el carácter directivo del puesto que ocupen.

3. Los Códigos de conducta serán publicados en su integridad en el “Boletín Oficial de Aragón”.

4. El Plan de formación de cada Administración pública concretará, anualmente, el conjunto de acciones formativas y otras iniciativas que atiendan a la divulgación y el conocimiento del conjunto de principios e instrumentos previstos en el presente Código.

5. Las Administraciones públicas promoverán las actuaciones necesarias para que el sistema de gestión del rendimiento que se establezca incluya, dentro de la valoración de la conducta profesional del empleado, criterios que permitan garantizar la observancia de los deberes y principios establecidos en este Código.

6. El incumplimiento del código de conducta podrá ser objeto de denuncia ante la Agencia de Integridad y Ética Públicas, siéndole aplicable al denunciante el mismo estatuto previsto para su protección en la sección siguiente.

Con independencia de lo establecido en la legislación referida, **las personas que ejerzan tareas de gestión, seguimiento y/o control que participen en la ejecución de las medidas del PRTR, prestarán especial atención en el cumplimiento del presente Código Ético y de Conducta** en los siguientes aspectos y fases del procedimiento de gestión de proyectos financiados con fondos del MRR:

1. Se llevará a cabo el cumplimiento riguroso de la legislación de la Unión, nacional y/o autonómica aplicable en la materia de que se trate, especialmente en las materias siguientes:

- Elegibilidad de los gastos.
- Contratación pública.
- Regímenes de ayuda.
- Información y publicidad.



- Medio Ambiente.
- Igualdad de oportunidades y no discriminación.

2. Las personas empleadas públicas relacionadas con la gestión, seguimiento y control de los fondos del MRR ejercerán sus funciones basándose en la transparencia, un principio que implica claridad y veracidad en el tratamiento y difusión de cualquier información o datos que se den a conocer, tanto interna como externamente.

Este principio obliga a responder con diligencia a las demandas de información, todo ello sin comprometer, de ningún modo, la integridad de aquella información que pudiera ser considerada sensible por razones de interés público.

3. Se tendrá especial cuidado en cumplir el principio de transparencia:

- Cuando se den a conocer y comuniquen los resultados de procesos de concesión de ayudas financiadas por los fondos del MRR.
- Durante el desarrollo de los procedimientos de contratación.

4. El cumplimiento del principio de transparencia no irá en detrimento del correcto uso que el personal debe de hacer de aquella información considerada de carácter confidencial, como pueden ser datos personales o información proveniente de empresas y otros organismos, debiendo abstenerse de utilizarla en beneficio propio o de terceros, en pro de la obtención de cualquier trato de favor o en perjuicio del interés público».



ANEXO VII

CODIGO DE BUEN GOBIERNO DE LAS AUTORIDADES Y CARGOS DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

La **Ley 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y Ética Públicas**, recoge, asimismo, en sus artículos 40 y 41 un Código de Buen Gobierno y de conducta de las autoridades y cargos del sector público autonómico:

«Artículo 40. Principios de buen gobierno

1. Las autoridades y cargos del sector público autonómico observarán y respetarán el Código de buen gobierno, que incluye los principios éticos y de conducta que deben informar el ejercicio de sus funciones.

2. Dicho Código podrá ser aplicable, de manera voluntaria y mediante adhesión individual, a las siguientes personas:

a) Diputados de las Cortes de Aragón, Justicia de Aragón, consejeros de la Cámara de Cuentas, miembros del Consejo Consultivo y los integrantes de cualquier otro órgano o institución análoga que se pueda crear en el futuro.

b) Los miembros de las corporaciones Locales y el personal directivo de su sector público.

c) Los miembros de los órganos de dirección de la Universidad de Zaragoza.

3. Son principios éticos:

a) El pleno respeto a la Constitución, al Estatuto de Autonomía de Aragón y al resto del ordenamiento jurídico, ajustando su actuación a los valores superiores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político.

b) La orientación estratégica y exclusiva a los intereses generales y al bien común de los ciudadanos, ejerciendo sus atribuciones con lealtad a la Administración aragonesa y respetando los principios de eficacia, eficiencia, diligencia y neutralidad.

c) La imparcialidad en sus actuaciones, sin que puedan condicionarlas ningún tipo de interés personal, familiar, corporativo, clientelar o cualquier otro que pueda colisionar con este principio.

d) La asunción de la responsabilidad de las decisiones y actuaciones propias y de los órganos u organismos que dirigen, sin perjuicio de otras que fueran exigibles legalmente.



e) El desempeño de la actividad pública regida por los principios de transparencia en la gestión y accesibilidad a los ciudadanos.

f) La abstención de contraer obligaciones económicas, realizar cualquier tipo de operación financiera o negocio jurídico que pudiera suponer un conflicto de intereses con su cargo público.

g) La no obtención de ningún privilegio o ventaja injustificada, beneficiándose de su condición.

h) La no contribución a la agilización o resolución de trámites o procedimientos administrativos que pudiera beneficiarles a ellos mismos o a su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros.

i) La confidencialidad y el secreto en relación con los datos e informes de los que tuvieran conocimiento por razón de su cargo, aun después de cesar, no pudiendo hacer uso de esa información para su propio beneficio o el de terceros, o en perjuicio de los intereses de los ciudadanos.

4. Son principios de conducta:

a) Dedicarse plenamente y con profesionalidad al servicio público, cumpliendo fielmente el régimen de incompatibilidades que les es aplicable.

b) Actuar con la diligencia debida y realizar una gestión eficiente y austera de los recursos públicos que tengan asignados, no utilizando los mismos en beneficio propio o de su entorno familiar y social, así como cuidar y conservar los recursos y bienes públicos asignados a su puesto.

c) Actuar con imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, sin que la pertenencia a órganos ejecutivos y de dirección en partidos políticos comprometa su actuación ni suponga menoscabo o dejación de las funciones que tengan encomendadas.

d) Hacer uso adecuado de los medios que se arbitran para el mejor y eficaz desarrollo de su función, administrando los recursos públicos con austeridad y evitando actuaciones que puedan menoscabar la dignidad con que ha de ejercerse el cargo público.

e) Hacer un uso adecuado, motivado, justificado y austero de los gastos de representación y atenciones protocolarias que tengan asignados por razón de su cargo.



f) Rechazar cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que suponga una ganancia o ahorro que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía o préstamos u otras prestaciones económicas que puedan condicionar el desempeño de sus funciones. En el caso de obsequios de mayor significación de carácter institucional se incorporarán al patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón, en los términos previstos en la legislación vigente.

g) Facilitar el acceso de los ciudadanos a la información requerida, con las limitaciones previstas en el ordenamiento jurídico.

h) Ser accesibles a los ciudadanos, respondiendo a sus peticiones, escritos y reclamaciones que formulen.

i) Evitar los contactos con lobistas no registrados y comunicar a la Agencia de Integridad y Ética Públicas cualquier violación del régimen de los lobbies de la que tenga conocimiento.

Artículo 41. Recursos humanos y materiales.

1. Las autoridades y cargos del sector público autonómico gestionarán los recursos humanos, económicos y materiales siguiendo los principios de eficiencia y sostenibilidad.

2. Las autoridades y cargos del sector público autonómico percibirán las retribuciones fijadas conforme a su normativa reguladora y a la Ley de Presupuestos, que habrán de ser

suficientes para no comprometer en modo alguno su integridad y coherentes con las funciones y responsabilidad encomendadas.

3. La utilización de vehículos oficiales por autoridades y cargos del sector público autonómico estará vinculada a las obligaciones de desplazamiento derivadas del desempeño de sus funciones y, en su caso, por razones de seguridad. La prestación de otros servicios que, en su caso, puedan requerir el uso de vehículos oficiales deberá ser debidamente justificada atendiendo a la naturaleza del cargo desempeñado y a las necesidades de seguridad, y de acuerdo al principio de eficiencia en el uso de los recursos públicos.

4. El crédito presupuestario de los gastos de representación y atenciones protocolarias solo podrá utilizarse para sufragar actos de esta naturaleza en el desempeño de las funciones de la autoridad o cargo del sector público autonómico, tanto



en el territorio nacional como en el extranjero, siempre que dichos gastos redunden en beneficio o utilidad de los intereses públicos y no existan para ellos créditos específicos en otros conceptos. No podrá abonarse con cargo a estos, ningún tipo de retribución, en metálico o en especie, para la autoridad o cargo del sector público autonómico.

Asimismo, deberán ser debidamente justificados y acreditar su necesidad para el desempeño de las funciones inherentes al ejercicio de la autoridad o cargo del sector público autonómico.

5. La Administración no pondrá a disposición de las autoridades o cargos del sector público autonómico tarjetas de crédito».



ANEXO VIII SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DEL PLAN

<https://intranet.aragon.es/medidas-antifraude>

Documento "Implementación planes antifraude"



ANEXO IX MARCO NORMATIVO

Normativa comunitaria y nacional de aplicación

- Orientaciones de la Comisión Europea de fecha 9 de abril de 2021 (Orientaciones de cómo evitar y gestionar las situaciones de conflicto de interés con arreglo al Reglamento Financiero).
- Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) nº966/2012 (1) Reglamento Financiero.
- Reglamento (UE, Euratom) nº966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº1605/2002 del Consejo (2) Reglamento Financiero.
- Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, es el núcleo de este Fondo de Recuperación.
- Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (3) (4) Directiva sobre contratación pública.
- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y su normativa en desarrollo.
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su normativa en desarrollo.
- Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.



- Ley 53/1984, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas
- Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
- Real Decreto Ley 36/2020, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
- Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
- Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
- Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el PRTR.

Normativa autonómica de aplicación

- Decreto Legislativo 3/2023, de 17 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- Decreto Legislativo 1/2022, de 6 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Presidente o Presidenta y del Gobierno de Aragón.
- Ley 11/2023, de 30 de marzo, de uso estratégico de la contratación pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- Decreto Legislativo 2/2023, de 3 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Subvenciones de Aragón.
- Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón.
- Ley 6/2017, de 15 de junio, de Cuentas Abiertas de Aragón.
- Ley 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y Ética Públicas.



- Ley 5/2021, de 29 de junio, de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón.
- Ley 1/2021, de 11 de febrero, de simplificación administrativa.
- Ley 2/2022, de 19 de mayo, de aplicación y desarrollo de la Ley 1/2021, de 11 de febrero, de simplificación administrativa.
- Decreto-Ley 2/2022, de 6 de abril, del Gobierno de Aragón por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para agilizar la gestión de los fondos procedentes del instrumento europeo de recuperación (Next Generation EU-MRR) para la reactivación económica y social de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- Decreto 5/2022, de 26 de enero, del Gobierno de Aragón, de medidas para impulsar la gestión urgente y coordinada de los procedimientos financiados con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
- Decreto 299/2023, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Decreto 5/2022, de 26 de enero, del Gobierno de Aragón, de medidas para impulsar la gestión urgente y coordinada de los procedimientos financiados con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
- Decreto 23/2003, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla el control de la actividad económica y financiera de la Administración, de los organismos públicos y de las empresas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- Decreto 202/2024, de 29 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública.
- Decreto 225/2024, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
- Orden HAP/1072/2023, de 7 de agosto, por la que se da publicidad al Acuerdo de 28 de junio de 2023, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el sistema interno de información sobre las acciones u omisiones previstas en el artículo 2 de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.



- Orden HAP/386/2024, de 17 de abril, por la que se establece el protocolo a seguir para la gestión del sistema interno de información sobre acciones u omisiones previstas en el artículo 2 de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.



ANEXO X

REFERENCIAS A BIBLIOGRAFÍA

A) ORIENTACIONES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE EFECTIVAS Y PROPORCIONADAS

- Evaluación del Riesgo de Fraude y medidas contra el fraude eficaces y proporcionales. Orientaciones para los Estados miembros y las autoridades del Programa. Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (DG REGIO) EGESIF_14-0021-00 16 de junio de 2014 [Comisión Europea].
- Instrucción General 10/2021 del Fondo Español de Garantía Agraria OA de Actuaciones para la prevención, detección y lucha contra el fraude y el conflicto de intereses [FEGA OA].
- Guía AVAF: El Plan de Integridad Pública: Hoja de Ruta y Anexos Facilitadores [Agencia Valenciana Antifraude].
- Orientaciones para el Refuerzo de los mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, referidos en el artículo 6 de la Orden HFP 1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de 24 de enero de 2022 (Secretaría de Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda y Función Pública).
- Guía para la aplicación de medidas antifraude en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, elaborada por el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA), de 24 de febrero de 2022.

B) MODELO POLÍTICA DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE

- Anexo 3 – Plantilla de la política de lucha contra el fraude. Evaluación del Riesgo de Fraude y medidas contra el fraude eficaces y proporcionales. Orientaciones para los Estados miembros y las autoridades del Programa. Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (DG REGIO) EGESIF_14-0021-00 16 de junio de 2014 [Comisión Europea].
- En esta línea pueden consultarse también las adaptaciones de la plantilla indicada en el punto anterior realizadas en el ámbito de las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI).



C) HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN DE RIESGO Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE (MATRIZ DE RIESGOS)

- Herramienta de evaluación del riesgo de fraude (DG REGIO) EGESIF_14-0021-006.
- Instrumento de autoevaluación para la identificación y cobertura del riesgo (Matriz de riesgos) [Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE)].
- Matriz de Riesgos del Anexo I de la Guía para la aplicación de medidas antifraude en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, elaborada por el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA), de 24 de febrero de 2022.

D) MEDIDAS DE DETECCIÓN E INDICADORES DE ALERTA DE FRAUDE (BANDERAS ROJAS)

- Comunicación de la Comisión Europea. “Orientaciones sobre cómo evitar y gestionar las situaciones de conflicto de intereses con arreglo al Reglamento Financiero”.
- Fraude en la contratación pública. Recopilación de indicadores de alerta y mejores prácticas (Ref.: Ares (2017) 6254403, de 20/12/2017) [OLAF].
- Detección de conflictos de intereses en los procedimientos de contratación pública en el marco de las acciones estructurales. Guía práctica para los responsables de la gestión [OLAF].
- Detección de documentos falsificados en el ámbito de las acciones estructurales. Guía práctica para las autoridades de gestión [OLAF].
- Nota informativa sobre indicadores de fraude para el FEDER, FSE y el FC (COCOF 09/0003/00).
- Banderas rojas por procesos de gestión de fondos: Ver riesgos y controles definidos en la Herramienta de evaluación del riesgo de fraude EGESIF_14-0021-00 [DG REGIO].
- Banderas rojas por instrumentos de gestión: Ver Catálogo de riesgos y banderas (Anexo III) Instrucciones para la cumplimentación de la herramienta de evaluación de riesgo y lucha contra el fraude [Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE)].



E) CONFLICTOS DE INTERÉS

- Detección de conflictos de intereses en los procedimientos de contratación pública en el marco de las acciones estructurales. Guía práctica para los responsables de la gestión [OLAF].
- Comunicación de la Comisión: Orientaciones sobre cómo evitar y gestionar las situaciones de conflictos de intereses con arreglo al Reglamento Financiero (2021/C 121/ 01) [Comisión Europea].
- Guía práctica para la aplicación de la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Secretaría General de Fondos Europeos-MH).

F) COMUNICACIONES SNCA

- Comunicación 1/2017, de 6 de abril, sobre la forma en la que pueden proceder las personas que tengan conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados total o parcialmente con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea y Anexo.
- Guía práctica El papel de los auditores de los Estados miembros en la prevención y detección del fraude en el caso de los Fondos Estructurales y de Inversión de la UE. Experiencia y práctica en los Estados miembros [OLAF].